



ASAMBLEA GENERAL
SECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL

XLIXª Legislatura
Tercer Período

COMISIÓN ESPECIAL SEGUIMIENTO SITUACIÓN CARCELARIA

Carpeta 9/2020

Distribuido: **77/2022**

3 de noviembre de 2022

COMISIONADO PARLAMENTARIO

OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD ASISTIDA (OSLA)

Visitas

Versión taquigráfica de la sesión del día
3 de noviembre de 2022

ASISTENCIA

- Presiden : Señora Legisladora Lucía Etcheverry y señor Legislador Carlos Camy (Vicepresidenta y Presidente de la Comisión, respectivamente)
- Miembros : Señoras Legisladoras: Lucía Barboza, Graciela Barrera, Nazmi Camargo y Verónica Mato; y señores Legisladores: Daniel Caggiani, Diego Echeverría, Gonzalo Geribón, Carlos Malán y Martín Sodano
- Invitados
Especiales : Señor Comisionado Parlamentario, Dr. Juan Miguel Petit
Por el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior: Comisario General (R) Luis Mendoza y Lic. Lourdes Salinas; Director y Subdirectora Técnica del INR, respectivamente; y por la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida: Comisario Marcio Dávila, Director; Psic. Gabriela Giacoya; Subdirectora Técnica; Subcomisaria Gabriela Belén, Subdirectora Operativa; y Cabo Jesús Belmonte, Subdirector Administrativo
- Secretarios : Señora María Rinaldi y señor Gonzalo Legnani
- Prosecretaria : Señora Mariela Gilet

**COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
SITUACIÓN CARCELARIA**

(Sesión celebrada el 3 de noviembre de 2022).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:32).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Nota de la Embajada de los Estados Unidos por la que solicita reunión de la comisión con tres expertos en reforma penitenciaria del Estado de Texas, que se encontrarán en nuestro país entre los días 6 y 9 de diciembre próximo. (Correo electrónico del 29/9/2022)». Esta reunión fue coordinada para el 8 de diciembre.

«Informe de actividades y listado de notas y recomendaciones enviadas por el señor comisionado parlamentario con fecha 20 de octubre del corriente año. (Correo electrónico del 24/10/2022)».

–Tal como se señaló, el 8 de diciembre a las 17:30 –día y hora de sesión ordinaria de la comisión–, se recibirá a la delegación de expertos del Estado de Texas, Estados Unidos, que concurrirá al Uruguay por temas de interés de la comisión.

Además, por parte de Secretaría se procedió oportunamente al repartido del informe de actividades y recomendaciones que sugiere el señor comisionado parlamentario.

Estamos ingresando en la última etapa del año con cierta complejidad en la agenda parlamentaria porque, como es sabido, se ha constituido la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley sobre el Sistema Previsional Común, que tendrá un régimen intenso de trabajo de tres días por semana, prácticamente a horario

completo. A ello se suman algunas otras actividades que puedan surgir y que siempre a fin de año tornan más dinámica la agenda parlamentaria.

Asimismo, debemos adoptar resolución sobre dos temas. Con respecto a uno de ellos teníamos previsto recibir determinadas sugerencias de los distintos integrantes del Cuerpo, como haremos hoy, por ejemplo, con los representantes de la OSLA. Quedaría pendiente la visita de las autoridades de ASSE, de la defensoría de oficio, del Sindicato de Operadores Penitenciarios, del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, y recibir información del Ministerio del Interior vinculada con los protocolos en los que se está trabajando con relación a quiénes pueden ingresar o no a las cárceles, tema sobre el que oportunamente trabajamos. Estamos hablando de invitaciones a concurrir a la comisión que han sido sugeridas por sus distintos miembros.

Por otra parte, en lo que hace al plan anual de visitas a unidades penitenciarias – que ha tenido buen suceso–, nos estarían quedando pendientes las siguientes: la Unidad 5 –Cárcel de Mujeres– y la Unidad 9 –Mujeres con Hijos–, que en realidad ya las visitamos pero es de interés de algún miembro de la comisión hacer una nueva visita, el centro de preegreso del sistema penitenciario ubicado en la Unidad n.º 4 en Santiago Vázquez y el propio penal de Santiago Vázquez; la cárcel de Florida y la cárcel Las Rosas, en Maldonado.

A pesar de las dificultades que tenemos por lo que mencionamos de la agenda medio complicada, creo que no deberíamos cesar en el régimen que hemos mantenido de visitar una unidad por mes. En ese sentido, se me ocurre considerar primero las tres que no han sido visitadas. Por tanto, pongo a consideración de la comisión este planteo y quisiera saber si alguien tiene especial interés en alguna de las unidades penitenciarias. Reitero que se trata de la cárcel de Florida, de Las Rosas, en Maldonado y el ex-Comcar, comprendiendo también al centro de preegreso.

Escucho a los legisladores si tienen alguna sugerencia en particular. De lo contrario, desde la mesa tomaremos alguna consideración.

SEÑORA BARRERA.- Señor presidente: mi planteo tiene que ver con algo que se habló antes. Nos quedó pendiente que SAI-PPL nos diera una respuesta de ciertas preguntas que habíamos hecho y no llegaron; al menos no las recibimos. Eso fue cuando estaba el legislador Sodano de presidente. No sé si lo recuerda.

Por otra parte, a mi manera de ver, creo que lo más urgente que tendríamos que visitar sería el ex-Comcar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero destacar que el legislador Sodano oportunamente tramitó ante SAI-PPL la notificación, por lo cual hay una falta de respuesta. Por tanto, vamos a insistir ante SAI-PPL y el Ministerio del Interior por el protocolo que estaban trabajando –seguramente lo deben estar confeccionando–, porque tenemos interés en recibirlo.

¿Hay alguna otra propuesta? ¿Estamos de acuerdo en priorizar para la próxima visita la unidad penitenciaria de Santiago Vázquez?

(Apoyados).

–Quiero señalar que estábamos coordinando y realizando las visitas a las unidades los viernes. Estos días van a ser difíciles porque el Senado va a trabajar miércoles, jueves y viernes con la comisión especial que va a tratar el proyecto sobre el sistema previsional común. Si no puede ir toda la comisión, prefiero que vaya restringida, pero que no que deje de concurrir. Entonces, pregunto si podría ser un lunes –por ejemplo, en el horario de la mañana– dentro de los primeros dieciocho días. Reitero: pese a la agenda compleja que tenemos al final del año, mi planteo apunta a no cesar en el plan que teníamos en el sentido de hacer una visita por unidad penitenciaria.

SEÑORA CAMARGO.- Si es posible, sería ideal que fuera el segundo lunes de cada mes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si estamos de acuerdo, el lunes 14 de noviembre, en el horario de la mañana, visitaríamos el ex-Comcar, y luego vemos el segundo lunes de diciembre si hacemos la visita a la cárcel de Florida o a la de Las Rosas.

SEÑOR SODANO.- Señor presidente: ya que vamos eliminando de la lista algunos centros penitenciarios, quisiera saber si podemos agregar, dentro de las prioridades para ir a visitar, la cárcel y la chacra de Minas, Lavalleja.

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguramente en este período no cubriremos todos los centros penitenciarios, pero me parece importante dejar ya una lista de prelación para el año que viene, si no los completamos.

Si estamos todos de acuerdo, al final de la prelación incorporamos la cárcel y chacra Campanero, en el departamento de Lavalleja.

(Apoyados).

–Solicitamos que el señor comisionado parlamentario se sirva ingresar, cuando lo disponga.

(Ingresa a sala el comisionado parlamentario, doctor Juan Miguel Petit).

–Comprendiendo la situación, sabemos que el señor comisionado va a ser muy esquemático y su ponencia será muy resumida, tal como lo caracteriza. Por lo tanto, el tiempo va a dar para que en treinta minutos nos ilustre con la solvencia con que suele hacerlo.

SEÑOR PETIT.- Buenas tardes, señores integrantes de esta comisión. Son muy amables por recibirme.

Efectivamente, voy a tratar de ser bien conciso, no porque el tema no dé para muchísimo más, sino porque me parece muy interesante que se reciba a representantes

de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Creo que es la primera vez que ellos vienen a la comisión; a mí me han tenido presente más a menudo y estoy más cerca. De todas maneras, había pedido esta reunión.

Reitero que para nosotros es muy importante esta comisión, y lo es doblemente al pensar en los tiempos que vienen en el año porque, como se decía recién, son momentos tensos en el sistema. Necesitamos tener una conexión permanente con los integrantes de la comisión, con el presidente, vicepresidente y legisladores. Muchos de ustedes se comunican con nosotros por planteos diversos, por lo que consideramos muy importante el diálogo con esta comisión.

En ese sentido yo envié una nota –creo que la secretaría la tiene y la habrá hecho circular– que es un resumen de las actividades realizadas durante el primer semestre del año, así como de las notas y recomendaciones enviadas. Se daba cuenta de unas treinta y cinco notas enviadas a juzgados.

La oficina está haciendo una actividad innovadora, que tiene un par de años, pero estamos aumentando muchísimo la presentación de solicitudes de atención, sobre todo en aplicación de los artículos referentes a derechos humanos del Código del Proceso Penal, como el 228, el 304 y el 305, en distintas situaciones: madres con hijos; mujeres embarazadas; personas con situaciones sociales a atender; personas de mucha edad; personas con problemas de salud. Esa es una nota importante para nuestra oficina, que sigue creciendo por ese lado.

En el primer semestre de este año se ha hecho un conjunto de setenta y siete notas con pedidos de informes o recomendaciones al INR. Ustedes tienen los pedidos de 2022 detallados uno por uno; no voy a ahondar en ello, solamente les pido por favor que mantengan en reserva los nombres de las personas que se hayan filtrado en alguna nota.

Además, se enviaron treinta y una notas a ASSE; veintitrés a juzgados; seis al Ministerio del Interior; cuatro a ASSE Central –dentro de las treinta y una anteriores, fueron seis PPL–; tres a hospitales; tres a Sanidad Policial; dieciocho a la Dirección Nacional de Defensa Pública; una a la OSLA; una al Mides; una al Codicén y dos a otros organismos.

Por un lado, la oficina sigue trabajando en lo que tiene que ver con la modalidad de promoción de derechos, impulsando las que llamamos mesas de intercambio institucional. En varios departamentos del país, con sus respectivas intendencias, hemos tratado de promover, por ejemplo, el trabajo con liberados. La idea es que haya servicios municipales que puedan llegar al sistema penitenciario, ya que las unidades penitenciarias son una parte más de nuestras ciudades y de nuestros departamentos. Es muy importante, entonces, que cuando hablamos de vecinos, pensemos que también hay unos vecinos particulares, en una situación específica, que son aquellos que están privados de libertad.

En ese sentido, se han llevado a cabo acciones muy interesantes como diferentes trabajos, talleres y cooperación en distintos ámbitos. Voy a citar algunos ejemplos, sin ser demasiado exhaustivo y sin dejar a nadie afuera. Las intendencias de Salto, Paysandú, Canelones y Rivera están llevando a cabo acciones muy interesantes. Concretamente, ayer fui convocado por el área de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo por esa misma inquietud, que habíamos planteado ya hace algunos años cuando era intendente el ingeniero Martínez. En aquella instancia elevamos una nota con recomendaciones a la intendencia para que sus distintos servicios se involucraran en el sistema penitenciario, lo que ocurrió en algunos aspectos. Luego hubo cambio de autoridades municipales y ahora surgió la idea de retomar el tema.

En otros departamentos venimos llevando a cabo mesas de diálogo para tratar determinados problemas o situaciones. A modo de ejemplo, varios integrantes de esta comisión se han preocupado por la situación en la cárcel de Maldonado; inclusive, he visitado esa unidad. A principios de año, hicimos una mesa de diálogo a raíz de los problemas existentes con el agua, el hacinamiento, la comida y, sobre todo, la inexistencia de un régimen de patio en esa unidad. Ahora hicimos una segunda mesa de diálogo a la que asistieron defensores, fiscales, jueces de ejecución y representantes de Sanidad Policial; si bien se lograron algunos avances con respecto al funcionamiento, la situación es muy compleja debido al alto grado de hacinamiento que hay allí, con más de mil cien personas y cupos totalmente insuficientes.

La situación del sistema sigue siendo extremadamente compleja y crítica en algunas áreas. Como se decía el otro día en la Comisión de Derechos Humanos, ya no podemos hablar de una situación de emergencia, porque esta es algo que aparece súbitamente. Esto, lamentablemente, es una llaga dolorosa, angustiante, desesperante que el país tiene, que es muy compleja de superar y que refiere a los tres poderes del Estado. Hay cosas que los tres poderes del Estado tienen para hacer. El Poder Judicial tiene mucho para hacer; está nada más ni nada menos que en la defensa pública, que para poder actuar adecuadamente requiere de importantes recursos. Sucede lo mismo con el Instituto Técnico Forense, del que dependen los peritajes, la evaluación de imputabilidad y los pedidos de salidas anticipadas, entre otras cosas. Respecto al Poder Legislativo, obviamente, todos sabemos de la importancia que tiene política, institucional y culturalmente. Hay diferentes aspectos de las normas procesales penales que entendemos que deben seguir siendo estudiadas.

Cabe destacar que seguimos trabajando intensamente en lo que refiere a elevar informes y recomendaciones a las autoridades. Este primer plano tiene que ver con la

promoción de derechos humanos a través de mecanismos de mesas de diálogo, reuniones, notas y planteos, muchas veces por mensajes de WhatsApp o en reuniones.

Asimismo, debemos destacar las cosas buenas que suceden. A mi juicio, es destacable el diálogo permanente que existe con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Todos los días tenemos más de media docena o una docena de comunicaciones por distintas vías en las que se plantean situaciones y se analizan problemas. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión para tratar el tema de la información y cómo se puede mejorar la ya existente. Recibimos mucha información; se nos pasan los partes diarios de las unidades, que era un viejo planteo de nuestra oficina que se ha podido concretar. En ese sentido, creo que es bueno señalar esa relación con el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Eso es solo parte del sistema. También hay otros aspectos que, por ejemplo, tienen que ver con la salud, sobre los cuales es necesario seguir avanzando.

La situación a nosotros nos preocupa muchísimo. Ya conocen los datos del informe 2021. Estamos iniciando la evaluación de 2022 con nuestros instrumentos, que son indicadores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales vamos a analizar la situación y a sopesar las buenas noticias y las novedades que ha habido –por ejemplo, ha habido cambios muy positivos en la cárcel de Tacuarembó–, así como las acciones positivas llevadas a cabo en algunos lugares.

Sin embargo, la impresión es que sigue existiendo ese tercio que señalamos de trato cruel, inhumano o degradante. Hay algo que es muy claro: la población penitenciaria ha aumentado, pero no los recursos para su asistencia, es decir, no se han incrementado los cupos significativamente ni tampoco el personal. Por lo tanto, lo que se nota es un aumento de población en los lugares que están en peores condiciones. Es en esa área metropolitana, en la que están los grandes penales, donde se encuentran las

peores condiciones. En definitiva, no sabemos cuál va a ser nuestra evaluación ni los números, pero todo indica que seguimos con un problema muy pero muy grande arriba de la mesa y que debemos continuar buscando políticas de Estado y construir innovaciones al respecto.

No voy a ahondar en cuáles son nuestras recomendaciones –medidas alternativas y trabajo con el egreso– porque ustedes las conocen.

Seguimos muy de cerca los trabajos de la Dinali –ahora en el Mides– y nos parece muy alentador lo que se está haciendo en esa área. Sin embargo, nos preocupan, en particular, los sectores que tienen las peores condiciones de reclusión. Hace poco enviamos una nota sobre el módulo 4 del ex-Comcar, con recomendaciones específicas, dado que allí hay un hacinamiento muy elevado. En algunos sectores en particular se llega a un hacinamiento de hasta 256 % o del 190 % en otras de sus salas. Allí se estaba realizando un plan que choca con ese límite de la cantidad de población. Repito que estamos hablando del módulo 4 del ex-Comcar.

Es muy difícil la comunicación de las situaciones que a nosotros nos llegan día a día. A veces son tan extremas las situaciones de hacinamiento en celda, de extorsiones, de violencia, de falta de acceso a tratamientos en salud mental o en adicciones, que la enumeración llevaría casi que a una especie de saturación. De todas maneras, ustedes han recorrido esos lugares y saben que allí hay un gran problema nacional.

Los que creemos que Uruguay tiene que ser un faro en materia de derechos humanos y en la construcción de la política pública, sabemos que la situación de hoy no es adjudicable a la Administración pasada, a esta, ni a la anterior; esta es una llaga estructural que tiene el país y tenemos que pelear para que no se vuelva crónica. Si queremos que los derechos humanos y la seguridad pública avancen en el país, tenemos que lograr, por lo menos, algunas mejoras significativas en esta área. Sé que es la

preocupación de todos y la retransmito también para que sepan que trabajamos con esas miras.

Por otro lado, venimos elevando a los jueces de ejecución –que, como hemos hablado aquí, son la máxima autoridad en materia de ejecución penal– situaciones que tienen que ver con adicción y salud mental. En este momento hemos enviado aproximadamente unas treinta y cinco notas a jueces de ejecución con nombres y apellidos concretos de personas que solicitan –por escrito y en entrevistas, en muchos casos hasta en dos y tres oportunidades– tratamiento para adicciones. En algunos casos se nos ha comunicado por parte de las autoridades sanitarias que han tenido medicación. Nosotros entendemos que el tratamiento de las adicciones requiere algo más que medicación. También entendemos que esta es una carencia de larga data y que hay un alto número de personas privadas de libertad con consumo problemático de sustancias –porcentaje probablemente mayor que el de la población general–, pero es necesario avanzar, aunque sea de a poco.

Esas treinta y cinco notas están presentadas ante la justicia de ejecución, a la que le vamos solicitando paulatinamente que se tomen las medidas que se entiendan pertinentes para que los prestadores de salud brinden a esas personas atención en el tratamiento de su adicción. Además de que se van sumando nuevos casos con el trabajo de la oficina, muchos casos van a seguir el camino que determine el Poder Judicial, porque cuando existe un diferendo entre los planteos, entre las observaciones relativas a derechos humanos, y la realidad, es necesaria la valoración que hace la autoridad de la ejecución penal, que es el juez de ejecución.

En ese marco, en algunas reuniones con jueces, ha surgido un apunte muy interesante y positivo: se recogió un planteo que también hizo la oficina relativo a que, en algunos casos, en la sentencia se solicite el tratamiento de la persona, de su adicción

en particular, pero también en salud mental o en educación, trabajo, etcétera. Va de suyo que la sentencia implica que la persona que la va a cumplir requiere tratamiento. Como dice la ley, el Poder Judicial juzga y hace ejecutar lo juzgado, pero esa ejecución corresponde a otra autoridad, la penitenciaria, y, dadas las dificultades que tiene el sistema, no está de más que los jueces también señalen la necesidad de que esa privación de libertad vaya acompañada de un tratamiento.

También le hemos solicitado a ASSE –como prestador de salud integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud y ejecutor de las políticas sanitarias– que nos informe si existe en ASSE un plan de atención del consumo problemático de sustancias en el sistema penitenciario. Todavía estamos a la espera de una respuesta. He tenido reuniones con ASSE, con el consejo directivo, con el presidente, con los mandos medios, siempre en la lógica de dialogar y analizar, pero también de aceptar nuestro rol de *ombudsman*, que implica elevar informes no solamente a nuestras contrapartes, sino también a nuestros mandantes, que son ustedes, los legisladores, y a la autoridad máxima, que es el Poder Judicial.

Con respecto al trabajo en medidas alternativas, hemos tomado notas. Tuve una reunión con el ministro del Interior hace poco y me señaló que se está trabajando en ese sentido. Se ha nombrado a unos sesenta y cinco funcionarios para ello; lo van a hablar con las autoridades de la OSLA. Solamente quiero hacer un comentario sobre este punto. Es un tema que da para mucho, hay un informe y algunos de ustedes participaron del seminario que hicimos sobre medidas alternativas. Simplemente quiero anotar que las medidas alternativas tienen que estar acompañadas de mecanismos de tratamiento. Medidas alternativas sin tratamiento solamente van a implicar más punición, porque, si solamente hay control, las personas van a incumplir el mandato. Si a una persona, como medida alternativa, le dicen que vaya a cortar el pasto a un municipio, puede cometer

una transgresión por su adicción, por su salud mental o por su situación de extrema vulnerabilidad. Si no tiene un tratamiento, la medida alternativa no la va a cumplir y el control lo va a detectar rápidamente, por lo cual, se estaría desnaturalizando el sentido de la medida alternativa, que no es el de encarcelar, sino el de agotar los recursos para tratar de que las personas que han cometido transgresiones que no constituyen delitos de gravedad puedan encontrar una solución comunitaria. Dicho esto, es interesante el apoyo que se ha señalado y que se le está dando a las medidas alternativas.

Ahora estoy enviando algunas notas sobre aquellos lugares que dije que siento una mayor preocupación, que son los módulos 3, 10 y 11 del ex-Comcar, la Cárcel de Mujeres –cuyo edificio es totalmente inadecuado, sobre todo el quinto nivel– y el área de salud mental que está en donde era la Jefatura de Policía de Montevideo. Necesitamos más instituciones, más locales y más técnicos si queremos afrontar esta temática con el grado de desarrollo que el Uruguay tiene y puede tener en estos temas. Uruguay ha sido tradicionalmente un país de vanguardia en temas de políticas sociales.

En el área de trabajo con mujeres privadas de libertad es muy claro que hay personas que tienen un trastorno de salud mental crónico y persistente, para quienes la cárcel no es una solución; el llamado quinto nivel de la unidad cinco es un lugar de contención, pero no de tratamiento. Este lugar ha sido usado con distintas finalidades, inclusive para casos de tuberculosis, etcétera, pero a veces se utiliza para personas con trastornos crónicos y persistentes de salud mental, a pesar de que no es el adecuado: no hay enfermería psiquiátrica ni personal especializado ni existen las condiciones de laborterapia y asistencia que se requieren. Reitero que esto se da en algunos casos, no en muchos. Lo mismo ocurre con adultos varones.

Estos son casos extremos, complejos, de salud mental; no son todos, sino aquellos casos crónicos y persistentes, para los que nosotros recomendamos a ASSE

tener, por lo menos, un grupo, una mesa de trabajo para empezar a identificar qué se puede hacer con esas situaciones. Se podrá decir: ¡otro grupo de trabajo más! Principio tienen las cosas y creemos que es fundamental empezar a analizar estos temas.

Insisto en los lugares que dije que siento una mayor preocupación: módulo 3, 10 y 11 del ex-Comcar, el quinto nivel de la Unidad 5 –Cárcel de Mujeres–, y el módulo 2 de Canelones. Cabe destacar que en el último año y medio, a partir de un trabajo con una perspectiva de derechos humanos y de mucho diálogo, el equipo de dirección de la cárcel de Canelones, pese a seguir con las mismas carencias materiales y siendo una cárcel muy violenta –con heridos graves y muertes–, ha logrado bajar abruptamente la cantidad de heridos que se registraban allí. Todos los lunes la oficina visita la cárcel; yo voy habitualmente. Este lunes estuve allí y realmente es muy positivo ver cómo, inclusive en el módulo 2, que tiene muy malas condiciones materiales y muy poco tratamiento, a partir de una actitud de diálogo, de búsqueda de soluciones y de diálogo con la familia, se ha logrado bajar la violencia que allí estaba instalada. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque es necesario que haya tratamiento en adicciones, más educación, trabajo con las familias, etcétera.

Nos preocupa la situación de hacinamiento que se da en la cárcel de Maldonado. Sin embargo, anoto como algo positivo que han logrado establecer un régimen de patio en todos los módulos. En algunas oportunidades ese régimen se incumple por distintas circunstancias, a veces comprensibles y otras no muy claras, pero nos consta que la dirección de la unidad ha establecido un régimen de patio para todos los sectores y que ha mejorado su salida.

De nuevo, ¿es suficiente? No, no es suficiente. ¿Cómo se hace para atender los problemas de fondo? Termino con la siguiente valoración: estamos con una

superpoblación muy importante que complejiza todo. Incluso, las mejores voluntades e intenciones naufragan con esta superpoblación.

El hacinamiento ha continuado aumentando. Se pasó del 109 % de plazas ocupadas en promedio en el 2020 al 123 % en 2021. A julio del 2022 la ocupación de cárceles era de 130 % y actualmente es de 132 %. Esto representa una cifra superior a las 3500 personas más que la capacidad oficial del alojamiento. Probablemente sea un poco más. Según la estimación, son más de 3500 las plazas que faltan, pero nos estamos ateniendo solamente a los números oficiales. Hablábamos hoy justamente, en una reunión que tuvimos con el INR, de que hay un número de plazas que cambian por esa creación de plazas que a veces se da. Hay plazas que se rompen, que se destrozan, que se cierran; hay plazas que se abren, que se reparan, u otras que se colocan en lugares que no son los originarios y que a veces no se computan, o si se cuentan y no se deberían hacer. En fin, son parte de los números con los que trabajamos cotidianamente. Allí no es un tema de mala voluntad ni de ocultamiento. Es más, muchas veces el INR ha corregido el hacinamiento al alza a partir de nuestras observaciones, con lo cual queda demostrada la complejidad que tiene esto, pero claramente 3500 cupos por lo menos es lo que falta. Son cifras promedio que revelan hacinamiento crítico con situaciones aún más críticas en algunas unidades y sectores. O sea, ese porcentaje en algunos lugares es mayor.

Si consideramos solo las plazas de mujeres, la densidad de ocupación es actualmente de 164 %. De manera que en el caso de las mujeres el hacinamiento es todavía mayor, lo cual demuestra una falta de perspectiva de género en las políticas penitenciarias; es un fenómeno mundial. Los sistemas penitenciarios masculinizan a las personas, fuerzan a las mujeres a vivir en un régimen similar al de los hombres, cuando la situación de la mujer privada de libertad y luego la mujer liberada es totalmente

diferente a la del hombre. Es mucho más vulnerable. Curiosamente, pese a ser mucho menos peligrosa para la seguridad pública, recibe a veces penas mayores, prisiones más largas y mayores abandonos.

Entonces, si consideramos solamente las plazas de mujeres, la densidad de ocupación es actualmente del 164 %. Hay 1031 mujeres, lo que representa unas 400 mujeres más que la capacidad total de alojamiento del sistema, que según el INR es de 631 cupos. Al tratarse de cifras globales no debe perderse de vista que la situación es aún más extrema en algunas unidades que en otras, por lo que se recomienda que la población esté por debajo del 100 % para evitar situaciones de superpoblación en algunos sectores. Sobre ese tema hay mucho para trabajar. Creemos que hay aspectos legales que se deben corregir.

Otro apunte que dejo para la comisión –es un dato importante– es que sabemos que hay preocupaciones, gestiones y conversaciones para corregir algunas dosimetrías penales, que nosotros creemos que también hay que corregir. Resulta bastante ilógico que en ese delito del ingreso de droga a la cárcel el mínimo de pena sea de cuatro años cuando en el homicidio el mínimo de pena es de dos años. No planteamos que sea un delito impune o que se autorice el ingreso de drogas a la cárcel, pero sí que se ajuste a la lógica dosimetría penal por una transgresión que claramente no puede ser valorada en su mínimo como más grave que el homicidio.

Hay un aumento de población de mujeres. Según datos oficiales del INR, en marzo de 2021 había 81 mujeres procesadas por este delito de ingreso de drogas a la cárcel y 74 de ellas tenían una pena impuesta por ese motivo. El promedio de pena de estas mujeres es de tres años y seis meses en la cárcel. En 50 de esos 74 casos –o sea, en el 68 %– la pena impuesta fue de cuatro años o más. En general hay una tendencia a que las penas más largas se den en las jurisdicciones del interior del país más que en el área

metropolitana. Hemos dialogado con jueces, fiscales y defensores, y sabemos que aun en fiscales y jueces existe preocupación justamente porque la aplicación mecánica de este artículo lleva a veces a absurdos jurídicos que creemos que hay que tratar de corregir preventivamente en la legislación.

Dejo el tema abierto a preguntas. No me quiero extender más de la cuenta porque, como les decía, sé que a continuación hay una presentación de la OSLA que me parece muy importante y a las siete tenemos una participación en un taller sobre otro punto que, creo, es central en esta temática: la responsabilidad penal atenuada. Estamos hablando de personas que cometen un delito pero que tienen una imputabilidad atenuada porque sufren una enfermedad de salud mental, una oligofrenia, una esquizofrenia; no pueden valorar el carácter antijurídico de sus actos y muchas veces pasan por fuera de los radares. Son casos que vemos puntualmente en personas condenadas. Cuando dialogamos con ellos, vemos que ni siquiera pueden explicar cuál es su situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Serían inimputables?

SEÑOR PETIT.- En muchos casos sí, o tendrían una imputabilidad parcial, que también es tenida en cuenta en las leyes.

Insisto en que hay sectores que tienen que ser reformados urgentemente o clausurados. Está muy claro que es muy difícil cerrarlos porque hay por lo menos 3500 cupos faltantes.

¿Cuáles son las recomendaciones que podemos plantear? Las hemos hecho ya en algún momento, pero las reitero.

Una de ellas es la creación de grupos al más alto nivel para la búsqueda e identificación de inmuebles públicos o privados a los efectos de generar urgentemente cupos, ya que los que se van a construir o se están haciendo van a demorar. Mientras tanto, sin duda que hay que trabajar en medidas alternativas y con las personas

liberadas. Sobre este último punto esperamos en diciembre realizar varias mesas con el Mides y varias instancias municipales y departamentales, que hemos llamado *La cárcel y después. Construyendo ciudadanía en libertad*. Creemos que este es un factor clave para bajar la reincidencia.

Estamos trabajando también, justamente, con la georreferenciación, o sea, de dónde vienen y adónde van las personas que pasan por el sistema penitenciario. Ese dato está y es muy relevante para las políticas sociales.

Creemos que con estas medidas se podría por lo menos evitar que siga creciendo de manera vertiginosa la población carcelaria, atender a la población actual, encaminar aquellos casos que pueden tener una atención fuera del sistema. Entendemos nosotros que puede haber un 20 % que sí puede estar atendido fuera del sistema de rejas, con mucho mejor resultado para toda la población.

También habría que pensar en un grupo al más alto nivel que pueda identificar algunos de esos problemas que requieren nuevos locales y la reparación de algunos locales que debe hacerse urgentemente. Esto no puede realizarse al ritmo de trabajo de las personas privadas de libertad, que es lento, porque tiene muchas veces el condicionamiento de que no hay una empresa constructora y, en consecuencia, tanto la calidad como los tiempos se vuelven muy largos. Más allá de que sea bueno que haya privados de libertad que trabajen, es muy importante que esas reparaciones se hagan muy rápidamente.

También hay otro conjunto de medidas prácticas sobre las cuales esperamos cumplir el rol de inspirar, catalizar, promover los derechos humanos, que es el papel que nos da la Ley n.º 17684 y que refiere a esta temática que, sabemos, tanto preocupa a los señores legisladores y que forma parte de uno de los desafíos de este tiempo.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Quisiera saber si todas las presentaciones, tanto la primera encuesta de opinión pública como los trabajos que se presentaron sobre medidas alternativas, fueron remitidas a cada uno de los legisladores que integramos la comisión. Me parece que es un material muy importante. Por primera vez hay una encuesta de opinión pública que dice que la sociedad civil está pidiendo medidas alternativas y no más cárcel. Creo que es muy importante que contemos con esa documentación. De manera que en primer lugar quisiera corroborar si se hizo y, de lo contrario, solicitarle que se haga a la brevedad. A través de la secretaría de la comisión podemos garantizar eso.

Por otro lado, quiero consultar respecto de algunas situaciones. Usted hablaba del sobrehacinamiento y nosotros lo venimos siguiendo. Pasamos de un 134 %, que estaba en su informe del 2021, a un 256 % en algunos lugares. Esto es tremendo. En virtud de eso, la consulta es si usted ha venido siguiendo o tiene a alguien del equipo siguiendo las obras para la construcción de los cuatro centros, el de Libertad, el de Tacuarembó, el de Treinta y Tres y el de Artigas, a los efectos de tener claro cómo viene eso, porque es lo que va a permitir resolver algunas cuestiones de hacinamiento.

Por último –pero no por eso menos importante–, está la situación de las mujeres que cumplen condenas por delitos vinculados al ingreso de sustancias a los centros penitenciarios, que está generando un problema enorme, sobre todo por los gurises. Quisiera saber si ha habido algún tipo de contacto con el grupo especial de asesoramiento en seguridad que tiene el Ministerio del Interior, que estaban pensando en estos temas, por encontrarse en una etapa de recomendación de medidas también. Digo esto a los efectos de aunar esfuerzos, para ver si logramos algún tipo de mínima acción que pueda atender esta situación, que es cada vez más crítica. Insisto en que no estamos planteando desconocer que se trata de un delito, sino que lo que estamos

diciendo es que la pena sea acorde a esa situación y que no generemos, además, un mayor daño en los gurises.

Hoy leía que estamos por emitir un segundo bono ambiental por cumplir determinadas metas. Imagínense si fuera por cumplir con los derechos humanos de los privados de libertad. La verdad es que esto empieza a generar un poco de impotencia.

SEÑORA MATO.- Creo que todos nos hemos quedado como callados y se bajó como el plafón de la comisión. Siento que está pasando eso en todos, porque obviamente los datos que se transmiten muestran una realidad muy compleja. Ya no estamos en una situación de emergencia. Es como que no tenemos ni la palabra adecuada para decir en qué situación están las cárceles hoy en Uruguay. Los números que se dan son realmente acuciantes.

Se me generan muchas preguntas, pero creo que nuestra labor, dentro de las capacidades o posibilidades de esta comisión, es generar un apoyo al trabajo que usted realiza. Una de las propuestas que usted mencionó fue generar un grupo que pueda buscar inmuebles públicos para poder generar traslados. La consulta es de qué forma nosotros podemos colaborar en eso, si usted se imagina algo más concreto, si se ha conversado, si lo ve posible, porque puede ser una alternativa rápida a esta situación.

Con la señora senadora Barrera fuimos a la cárcel Las Rosas y podemos decir que está en una situación tremenda. En un mes murieron tres personas por distintas situaciones. Hay un psicólogo para 1160 personas, y un psiquiatra va una vez por semana para atender a toda esa cantidad de personas. A todo esto hay que agregar el 159 % de hacinamiento que tiene esa cárcel. No hay *handies*; no hay materiales. Es muy preocupante la situación de salud mental y de impacto en el grupo de mujeres, por algún tipo de muerte específicamente que se dio. Usted fue a la Cárcel Las Rosas luego de que

estuvimos nosotras, de manera que quería saber si se pudo avanzar en algo con respecto a esto, más allá de lo que nos relató.

También sé que una concejala tuvo una reunión con la gente de Las Rosas y pudo conseguir, por ejemplo, pintura o que se hiciera algún trabajo. Lo planteo pensando también en tirar posibilidades a través de los municipios o de las intendencias, o abrir la cancha lo más posible, porque este no es solamente un tema del INR ni del Ministerio del Interior. Es un tema que nos atraviesa a todas las personas que tengamos responsabilidades al respecto, porque, más allá del tema seguridad, termina siendo un problema social.

En cuanto a la privación de libertad de mujeres y a ese 164 % de hacinamiento, quisiera saber si Inmujeres, por ejemplo, ha tenido algún tipo de diálogo con usted con respecto a este tema, por las trayectorias de vida que tienen muchas mujeres.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin ánimo de restringir las intervenciones, agradecería si se pudieran concretar las preguntas y no hacer tanto prólogo, porque ya hace más de quince minutos que hay otra delegación esperando.

SEÑOR SODANO.- Voy a colaborar con su petición, lógicamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradezco.

SEÑOR SODANO.- Además, con el comisionado ya tuvimos en el día de hoy la suerte de haber trabajado en otra comisión más temprano. Sí quiero insistir en lo que decía la legisladora Etcheverry, en el sentido de que estaría muy bueno que se nos hiciera llegar la encuesta de opinión pública sobre el tema de las medidas alternativas. Creo que es algo que la sociedad está planteando y sobre esa base se ha presentado alguna propuesta en el Parlamento.

SEÑOR PETIT.- Muy rápidamente, quiero decir que hace bien la legisladora Etcheverry al pedirme que envíe los informes por correo electrónico. Están en la página

web, pero no lo enviamos a la comisión. Sabemos que hoy en día la buena comunicación implica sumar vías. Entonces, se los voy a mandar a la comisión y también al correo electrónico de cada uno de los legisladores.

Con respecto a las obras, tengo información de primera mano sobre la cárcel de Tacuarembó; realmente vine muy gratificado de ver lo que allí está ocurriendo. La cárcel de Tacuarembó es de las peor evaluadas, estaba en el centro y, literalmente, se caía a pedazos. La verdad es que, en el transcurso de algo más de un año, ha pegado un salto cualitativo: hay un director que, con su equipo, realmente le ha dado un encare muy interesante a esa vieja cárcel; tiene mucho contacto con las ONG, la intendencia, la Universidad, el sector productivo, etcétera, y trabaja con la OSLA. Se la pintó, se la arregló, y para lo que era un patio desvencijado consiguieron la donación de un césped artificial. Lo que se logró en Tacuarembó es muy conmovedor y llamativo. Se podrá decir que allí no están reclusas personas con conductas más complejas, etcétera, pero claramente se logró un cambio muy importante. La nueva cárcel en las afueras de la ciudad –en la que estuve hace más de un mes– está en vías de finalización; según se me informó, está prevista su inauguración para el mes de diciembre. Inclusive, hubo cambios a nivel del diseño original del Ministerio del Interior, producto de recomendaciones y planteos del equipo técnico del lugar; por ejemplo, se ampliaron los espacios abiertos, el sector deportivo y los talleres. Realmente, considero que esta es una muy buena noticia para el sistema.

Con relación al departamento de Artigas, estuve en el lugar en el que se va a hacer la nueva unidad en Pintado Grande. Cuando visité la zona hace dos meses y medio no habían empezado las obras; así que sobre el particular no tengo más información.

Según tengo entendido, tampoco en Treinta y Tres han empezado las obras, pero carezco de información oficial sobre eso.

Sobre los tres módulos del Penal de Libertad, tengo información del ministerio, pero me parece que corresponde a sus autoridades brindarla; de todas formas, digo que eso está encaminado. Con respecto a toda la parte de los llamados a licitación, etcétera, estamos estudiando los planos que se hicieron. No nos corresponde a nosotros decir cómo construir una cárcel, pero sí estar al tanto de la situación y eventualmente hacer observaciones. Este es un tema que lo estamos siguiendo de cerca, pero, como dije, todavía se encuentra en proceso licitatorio y ojalá se pueda arrancar cuanto antes. Esto es cuanto podemos decir al respecto.

Con el grupo de seguridad que preside la licenciada Valfre no he tenido diálogo sobre el tema de mujeres privadas de libertad. Hacen bien los señores legisladores en señalarme este punto y a la brevedad me comunicaré con sus integrantes. Sí me reuní un par de veces para abordar el tema de las medidas alternativas en general, entre otros, pero me comunicaré con ellos nuevamente. Sobre este punto creo que hay un planteo parecido al de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en el sentido de fomentar las medidas alternativas y lo que nosotros llamamos prisión domiciliaria asistida. La idea es que la prisión domiciliaria o la medida alternativa tengan tratamiento y asistencia. Nos parece que la mujer que va con prisión domiciliaria a su casa porque tiene hijos y no tiene posibilidades de salir a estudiar, trabajar, capacitarse, etcétera, es una muy mala apuesta, porque la persona va a terminar incumpliendo la medida para sobrevivir. Resulta ser un alivio no ir a la cárcel, en tanto es una medida que le permite mantener su familia, pero si no tiene un mecanismo de subsistencia, formación, etcétera, no va a ser positivo.

Con relación a lo que preguntó la señora legisladora Mato, no era mi intención generar una nube de pesimismo. Creo que están pasando cosas buenas y, por más que sé que son piezas de un rompecabezas, veo mucho más actores involucrándose e interesándose en el tema cárcel, como actores políticos, comisiones de este Parlamento, universidades, grupos técnicos, oenegés y sindicatos, entre otros.

Considero que el INR tiene una actitud muy proactiva a la hora de resolver las emergencias. Creo que en el instituto son conscientes de que, producto de la covid, están totalmente estresados por tener mucha más población que a la que pueden responder. Si entráramos a la microsociología de cada una de las situaciones, lo que podríamos analizar sería mucho más deprimente, porque las situaciones son muy preocupantes y desesperantes. Creemos que son, como decíamos, esa llaga estructural que tiene el país, que es desesperante, pero solucionable. Hay terapéutica para eso, no hay que resignarse. En muchas unidades hay pequeñas experiencias que se están llevando adelante, por ejemplo en lo que tiene que ver con lo productivo. Está la ley laboral para los privados de libertad, que no se está implementando todavía, pero es un instrumento. También tenemos el trabajo de la Dinali, pero los problemas crecen, juegan y, por lo tanto, es una carrera contra el tiempo. No es una carrera para evitar que pasen cosas graves, que están ocurriendo. Todos los que trabajamos en el monitoreo de los derechos humanos sabemos que ese tercio que reflejamos en un papel sigue estando allí todos los días en condiciones que el Uruguay debería superar. Esto nos angustia y nos desespera. Tratamos de no utilizar golpes bajos ni golpes de efecto, pero estamos trabajando intensamente sobre eso que nos preocupa muchísimo.

Con respecto al hacinamiento de mujeres, creo que sí debemos pensar en la prisión femenina. Hay que ir hacia un sistema diferente. Sobre lo que se señaló, creo que la dotación técnica del sistema es una de las cuestiones claves que hay que superar.

Tenemos el trabajo con las familias, el trabajo vincular, el trabajo de rehabilitación y el trabajo educativo. Esto lo muestra, justamente, hasta la propia contención de la situación actual. Esta, de alguna manera, no empeora porque hay pequeñas grandes acciones, aunque es hasta algo desajustado llamarlas por mi parte «pequeñas». Las llamo pequeñas en el sentido de que no son de una macropolítica. Entonces, hay pequeñas acciones que nacen a veces de los funcionarios, del propio INR, de alguna institución, del área educativa, de capacitación, etcétera, y así se logran grandes resultados. Por supuesto que con más intervenciones se van a lograr mayores resultados. Por eso seguimos creyendo que es posible revertir esto.

Termino con una anotación. Con respecto al planteo de varios legisladores, como Camargo y Sodano –perdón que nombre a algunos, pero son los que me han hecho planteos directos–, ni que hablar Graciela Barrera –que nos comunicó un caso muy preocupante, como una amenaza a una familia y sé que el INR está trabajando al respecto– y también la legisladora Mato –que mencionó el tema de los niños, no solamente los que están con sus madres en prisión, sino también los chicos en general de los privados en libertad–, enviamos una nota al INR porque habíamos registrado situaciones de violencia en las visitas. Lamentablemente, existen situaciones de violencia durante la visita en algunos de los veintiséis lugares, que son muy heterogéneos, pero bueno, en el área metropolitana se juntan las peores situaciones. Entonces, enviamos una nota planteando una recomendación en el sentido de reforzar esa área, lo que se hace por ejemplo en la Unidad 1, que tiene buenas condiciones para la visita, como ser juegos, espacio físico, lugares al aire libre. En algunas áreas del ex-Comcar también se da, pero en otras no. Tampoco ocurre en el Penal de Libertad. Vamos a tratar de que eso pueda generalizarse mediante un protocolo, una normativa para recordar que la instancia de visita es muy importante.

Es relevante cada inversión que hagamos para evitar que la visita sea algo traumático para el niño, porque no puede expresar lo traumático que significa aquello que es normal y existe en cualquier cárcel del mundo –como la reja, el control policial, etcétera–; entonces, cuanto más bajemos esos elementos, cuanto menos agresivo sea el recuerdo, estaremos bajando un disminuyendo el nivel de adversidad y de estrés que va a tener en sus primeros meses o años de vida. Es una inversión que no podemos medir exactamente hoy en día, pero sabemos que, sin duda, cuanto más bajemos esa adversidad en la primera infancia, mejor resultado vamos a tener en la adolescencia y la juventud.

Con respecto a esa inquietud, enviamos una nota al INR y seguiremos trabajando en ese tema, que es muy caro para todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del señor comisionado, lo despedimos y aguardamos el ingreso de la nueva delegación.

Muchas gracias.

(Se retira de sala el comisionado parlamentario, doctor Juan Miguel Petit).

–A continuación, corresponde recibir especialmente invitadas a las autoridades de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida.

(Ingresa a sala la delegación de la OSLA).

–Buenas tardes.

En nombre de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, de la Asamblea General del Poder Legislativo, damos la bienvenida a la delegación del Instituto Nacional de Rehabilitación, integrada por su director, comisario general (r.) Luis Mendoza, y su subdirectora nacional técnica, licenciada Lourdes Salinas, así como a la de la OSLA, conformada por su director, comisario Marcio Dávila; su subdirectora

técnica, subcomisaria Gabriela Giacoya; su subdirector administrativo, cabo Jesús Belmonte, y su subdirectora operativa, subcomisaria Gabriela Belén.

Muchos de ustedes han concurrido en diversas oportunidades. Para quienes no lo han hecho, les agradecemos que se identifiquen que cada vez que hagan uso de la palabra a efectos de facilitar el trabajo de toma de la versión taquigráfica.

La comisión ha convocado a integrantes de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida en el marco del ejercicio de sus competencias y facultades, fundamentalmente porque en el trabajo que se viene realizando se ha entendido por parte de diversos legisladores la importancia que tendría conocer la opinión de la oficina con respecto a la situación que se vive en la actualidad.

Quisiéramos que nos contaran cómo está funcionando, en qué condiciones, cuáles son los propósitos y la planificación de actividades, para después quedar abiertos a contestar las distintas preguntas y consideraciones que hagan los señores legisladores.

SEÑOR MENDOZA.- En principio, quiero agradecer la invitación a los representantes de la OSLA que hoy vienen acompañados por el comando del INR. La OSLA, si se aprueba en la rendición de cuentas del año que viene, será una subdirección nacional debido a que esta oficina fue creada en el 2010 como oficina propiamente dicha para el control de los arrestos domiciliarios. Después, en el 2013 se implementó la ley de faltas; otra función para la OSLA. Es decir que se le fueron agregando misiones. Luego, con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, en noviembre del 2017, entró lo que tiene que ver con la ley penal. Ahí la OSLA también tenía medidas alternativas: primero, por faltas; después, en 2017, por la ley penal; inclusive, trabajos comunitarios.

(Se exhibe presentación en PowerPoint).

—A la OSLA se le fueron agregando tareas, pero nunca se la consideró como una institución independiente, sino como una dependencia más del INR y, a los efectos de

nuestra administración, es una unidad más. Si bien no se puede comparar con una cárcel, tiene la misma estructura. El INR tiene un director nacional y tres subdirectores; la OSLA tiene un director, el comisario Dávila, y tres subdirectores en las áreas operativa, técnica y administrativa, respectivamente, como sucede en las cárceles.

Nunca se crearon vacantes para la OSLA. Se le fueron incrementando las tareas, pero nunca se dispuso de más personal, sino que es el que se quita de las cárceles. La OSLA cuenta con noventa y nueve funcionarios –muy por debajo de los que deberían ser–, de los cuales cincuenta están en la subdirección técnica, y de ellos solo catorce son técnicos. Todo el personal fue pasado en comisión a la OSLA desde la cárcel. Es decir que el personal de la OSLA no ingresó para esa oficina, sino para el INR cárcel. En la medida en que se le fueron dando más competencias, se fue sacando personal de las cárceles, a pesar de las menguadas fuerzas que tenemos, para poner en la OSLA.

Si bien hoy la OSLA es nacional, tiene un radio –se va a explicar mejor en el PowerPoint– de cuarenta kilómetros alrededor de Montevideo; abarca parte de Canelones y de San José. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el interior del país, las competencias diarias del trabajo del control de medidas alternativas se llevan a cabo en colaboración con las jefaturas departamentales –a pesar de que no esté previsto dentro de su misión–, teniendo en cada jefatura un oficial de enlace con el INR. Los planes de intervención dispuestos por la justicia son llevados a cabo –dentro de sus posibilidades– por gente de la OSLA con base en Montevideo, que se traslada a los diferentes puntos del país para hacer los planes de intervención que tienen un de vencimiento.

Nuestra idea es ir incrementando el personal. Nosotros tomamos la OSLA con menos gente y fuimos adquiriendo personal de las cárceles.

Otra de las misiones de la OSLA es el control de las tobilleras. Hoy, tenemos ochocientas tobilleras; seiscientas son tipo GPS y doscientas GPS, pero con el denominado «faro», que es para poner en los domicilios de las personas cuando así se dispone. En el PowerPoint figura la cantidad de tobilleras que tenemos, pero debemos controlarlas. Eso es importante y por tal motivo tiene que haber una base –que ahora está funcionando al mínimo– con monitores como tiene el CCU, en Montevideo y en el interior, que las controlan permanentemente. Por ello ya se hizo un llamado y está pronto, para la firma del señor ministro, el ingreso de 65 personas a la OSLA como policías para hacer 45 tareas de monitoreo de las 800 tobilleras que tenemos –como mencioné– y 20 personas para incrementar la subdirección técnica.

Además, se están haciendo todos los planes preliminares para trabajar con técnicos. Nos faltan muchos y estamos instrumentando un llamado para 23 psicólogos y 44 trabajadores sociales para el INR –insisto: nos faltan técnicos– y parte de esas 67 personas van a trabajar con la parte técnica. Le vamos a dar parte de este personal a la OSLA. Rectifico por si me equivoqué: son 45 personas para monitorear la parte operativa de las tobilleras –porque permanentemente tiene que haber gente mirando los monitores– y 20 para la subdirección técnica. Son 65 las vacantes de policías que tiene el INR para distribuir en las unidades de todo el país. Por lo tanto, teniendo en cuenta la necesidad de la OSLA, a medida que va ingresando gente, la vamos destinando a diferentes cárceles y también a esa oficina. En resumen, de a poco vamos dando personal a OSLA, pero precisa mucha gente si queremos que funcione como debe. No digo que sería como otro INR, pero sí necesita una cifra importante, porque se deben contemplar las diecinueve capitales departamentales y cada juzgado departamental toma medidas, que son de control domiciliario, libertad a prueba, faltas, suspensión condicional del proceso, trabajo comunitario y medidas cautelares que son restrictivas.

Todo eso precisa una delegación en cada departamento para cumplir. Además, hay que tener en cuenta que los departamentos tienen otras ciudades además de las capitales – segunda, tercera o cuarta ciudad– y las medidas alternativas pueden disponerse en cualquier lugar del departamento. Es decir que para implementarlo necesitamos una gran cantidad de personas operativas –no digo como en un INR, pero sí importante–, principalmente técnicos, para hacer todos los planes de intervención y de control de las medidas alternativas en todo el país.

Señor presidente: si me autoriza, cedo la palabra a la subdirectora nacional técnica, que coordina la OSLA.

SEÑORA SALINAS.- Buenas tardes para todos, y muchas gracias señor director.

En el día de hoy el equipo de dirección de la OSLA va a realizar un breve recorrido histórico, no solo de su creación, sino también del estado de situación actual. En ese recorrido ustedes van a poder observar diferentes avances realizados desde su creación, pero también las dificultades que presenta hoy en día la oficina.

Entendemos que ha habido importantes avances, pero al día de la fecha no han sido suficientes justamente para cumplir a cabalidad con lo dispuesto por la legislación de nuestro país. Por eso hoy estamos acá, justamente para dar cuenta del estado de situación, las dificultades, los avances y también las necesidades que tiene en el día de hoy la oficina.

En estos avances me gustaría destacar particularmente lo que tiene que ver con el área técnica, que seguramente Gabriela Giacoya va a desarrollar más en la presentación siguiente.

En varias oportunidades hemos destacado la incorporación en el área técnica –en el área de evaluación y de intervención penitenciaria– del modelo de riesgo de reincidencia. Si bien lo hemos destacado en todo lo que tiene que ver con la privación

de libertad, este modelo se implementa también en las medidas alternativas. Una vez que se dispone una medida alternativa, la persona es evaluada por un equipo técnico con una herramienta que ustedes ya conocen –la hemos nombrado varias veces–, Oasys –Offender Assessment System–, que valora, justamente, los factores de riesgo. Por lo tanto, no solamente se utiliza en la privación de libertad, sino también en todo lo que tiene que ver con las medidas alternativas. Obviamente, se pasa de un paradigma de peligrosidad de la persona a visualizar cuáles son esos factores que inciden en su conducta delictiva para luego gestionarlos.

Para nosotros es muy importante poder fortalecer todos los convenios con los que ya cuenta la OSLA hoy, porque una vez que se realiza esa evaluación de riesgo se determina un plan de intervención individual para esa persona y se necesita de otros actores –externos al Instituto Nacional de Rehabilitación y a la OSLA– para poder derivar a esa persona a la comunidad y abordar todo lo que tiene ver con adicciones y los impulsos, para realizar tratamientos psicológicos, entre otros. Por lo tanto, me gustaría no solamente destacar el gran avance en cuanto a la visión de la persona que cumple medidas y cómo abordarla, sino también las necesidades en cuanto al fortalecimiento de los convenios que hoy ya tiene la oficina.

Muchas gracias.

SEÑOR DÁVILA.- Buenas tardes. Agradezco la invitación.

Como dijo la subdirectora técnica, vamos a explicar cómo fue el proceso de evolución de las medidas sustitutivas en Uruguay, que es un modelo europeo.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, países como Italia e Inglaterra comienzan a aplicar la medida sustitutiva. A mediados del 2000 hay un cambio de paradigma en Uruguay y en 2003 se aprueba la Ley n.º 17726, a partir de la que comienzan a aplicarse las medidas sustitutivas. En su momento, esto era una necesidad por la superpoblación:

el sistema penitenciario era para tres mil y algo de personas y contaba con el doble, siete mil personas. En ese entonces comienza la medida sustitutiva del arresto domiciliario, que era controlado por las jefaturas departamentales en el interior y por la Jefatura de Policía de Montevideo. En ese entonces también se establecieron otras medidas, como la prestación del servicio comunitario, y algunas restricciones, como que la persona no pudiera concurrir a ciertos lugares. Además, había un apoyo importante del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que colaboraba en la aplicación de las medidas.

En 2005 se promulgó y entró en vigencia la Ley n.º 17897, relativa a la prisión domiciliaria, que establecía que la persona tenía que estar las veinticuatro horas en su domicilio. El arresto domiciliario tiene diferentes formas: total –veinticuatro horas– o parcial, que implica que en determinado horario o los fines de semana la persona tiene que permanecer en domicilio, siempre y cuando esto no afecte la vida diaria y pueda desarrollar actividades sociales y laborales.

Como dijo el director, por el Decreto n.º 180/010, se crea la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida –que comienza a trabajar en su sede de San Martín 2533– y empieza la intervención de las medidas sustitutivas de arresto y prisión domiciliaria, e internamente se crea lo que se llamaba Área Comunitaria, relativa a las comunitarias penales. El trabajo se seguía realizando en coordinación con las jefaturas departamentales.

En 2013 se aprueba la ley de faltas, que establece que, al cometerla, la persona tiene de siete a treinta días de servicio comunitario.

A partir de este momento, la OSLA obtiene protagonismo a nivel nacional, trabajando con las diferentes jefaturas departamentales.

En 2014 se crea la figura del oficial de enlace, que es un jerarca departamental que trabaja en coordinación con la OSLA de Montevideo. Se encarga de controlar los

arrestos y las prisiones domiciliarias y la intervención en la tarea comunitaria y restrictiva.

En 2015 se comienza a controlar a través de dispositivos electrónicos. En ese entonces eran equipos con tecnología 3M, por radiofrecuencia: se reportaba la ausencia de la persona que salía de su domicilio. Se trabajaba en coordinación con el CCU-Jefatura y CCU-Dimoe en temas técnicos. O sea que el control informático lo hacía el CCU-Dimoe y la parte operativa la llevaba adelante la OSLA.

En 2016 se aprueba la Ley n.º 19446 sobre libertad vigilada. En ese entonces, el equipo de la OSLA central realizaba las intervenciones en las medidas sustitutivas de la prisión en coordinación con los jefarcas departamentales, los oficiales de enlace. La diferencia que tiene esto con la libertad vigilada es que el equipo técnico de la OSLA se encarga de la intervención y las jefaturas departamentales controlan los arrestos y la prisión domiciliaria.

En 2017, como todos sabemos, el nuevo Código del Proceso Penal realiza algunos cambios.

En 2019 se aprueba la Ley n.º 19831, Regulación del régimen de libertad vigilada. La Ley n.º 19446 tenía algunas disposiciones que establecían que la persona debía mantenerse en su domicilio hasta ocho horas diarias continuas y la Ley n.º 19831 la complementa. Esto se establece gracias a que, en su momento, se disponía el control de libertad vigilada a través de los dispositivos electrónicos y, a veces, la persona se excedía de las ocho horas. Esta ley complementa esa problemática existente, aparte de hacer otras modificaciones.

En 2020, como ya sabemos, se aprueba la Ley n.º 19889, LUC, que modifica los artículos que van del 2.º al 12 de la Ley n.º 19446 y deroga los artículos que van del 1.º al 11 de la Ley n.º 19831.

Lo que tiene la libertad a prueba es el plus de las tareas comunitarias: las personas deben cumplir tareas comunitarias. Es una obligación. Ahora, de a poco, se va extinguiendo la libertad vigilada, porque la ley que la establecía fue derogada, pero, para que quede claro, las intervenciones correspondientes las lleva adelante el equipo de la OSLA, integrado por catorce técnicos; nosotros hacemos las coordinaciones con los oficiales de enlace y los viajes para la intervención. Por ejemplo, si hay que ir a Bella Unión, se debe coordinar con el oficial de enlace y prever los recursos logísticos y humanos para realizar el viaje. Del arresto y de la prisión domiciliaria se encarga la jefatura de cada departamento.

Muchas gracias.

SEÑORA GIACOYA.- Buenas tardes, soy la psicóloga Gabriela Giacoya, subdirectora técnica de OSLA. Muchas gracias por recibarnos y vamos a tratar de mostrar qué es lo que hacemos cotidianamente.

La OSLA, de acuerdo con el mandato judicial, hace el seguimiento de las medidas alternativas a la prisión con un sentido claramente definido: analizar los factores de riesgo de las personas a las que les fueron impuestas medidas y elaborar un plan de intervención que trate de minimizar esos factores de riesgo de reincidencia. ¿A través de qué? De acciones que permitan modificar la conducta. Para ello, necesitamos tiempo y los recursos que la comunidad ya tiene a través de programas que minimizan esos factores de riesgo, como por ejemplo –tal cual decía Lourdes Salinas hoy– tratamientos de consumo problemático, control de impulsos, etcétera.

A riesgo de aburrirlos, quiero que imaginen que en 2018 teníamos 1078 medidas y al año siguiente estábamos gestionando diez veces ese número. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue organizar todos los procesos de la institución, profesionalizar a los técnicos y tratar de hacer un seguimiento lo más profesional posible.

La realidad actual es que en la subdirección técnica contamos con 54 personas a nivel nacional, y esto es importante señalarlo, porque hace mucho tiempo que la OSLA dejó de ser una oficina y mucho menos dedicada a la libertad asistida. Hacemos muchísimas cosas, pero no estrictamente asistencia a la libertad asistida. Sí nuestro norte es la minimización de los factores de riesgo para evitar la reincidencia de estas personas. Si pudiéramos hacer nuestro trabajo con todos los recursos que necesitamos, esto impactaría en la seguridad pública; de eso estamos convencidos.

Hoy en día tenemos 19.634 medidas con 99 personas trabajando en esto, de las cuales 54 pertenecen a la subdirección técnica. En las 19.634 medidas que observan en la gráfica están incluidas las medidas de la subdirección operativa, que son 1151 y que después la subcomisaria Belén les va a explicar.

Para gestionar una medida alternativa hay muchas figuras, pero la mayoritaria hoy en día es la libertad a prueba. Cada medida alternativa tiene unas cuantas condiciones que la persona debe cumplir. No es simplemente hacer tarea comunitaria, como en general cree la población. Las tareas comunitarias son una de las condiciones que debe cumplir el imputado. Cuando nosotros hacemos un informe, además del análisis de riesgo, devolvemos a los magistrados la imagen de toda la conducta de la persona, y esto tiene que ver con el cumplimiento o no de todas las condiciones que el magistrado puso. Un principio básico que nosotros nos impusimos es la integralidad de la medida: devolver esa imagen de la conducta.

Pueden ver ahora la cantidad de medidas supervisadas en este año y también les trajimos la evolución, pero todo este material se lo vamos a dejar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de que continúe, ¿me puede especificar las siglas?

SEÑORA GIACOYA.- Subdirección Técnica es STD, libertad vigilada es LV y libertad a prueba es LAP. Si los señores legisladores lo consideran necesario, puedo aclarar cuál es la diferencia entre la libertad vigilada y la libertad a prueba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecería, si es tan amable.

SEÑORA GIACOYA.- La libertad vigilada es una medida alternativa que va hasta tres años. Hoy está derogada, pero todavía seguimos recibiendo personas en ese régimen, en tanto los procesos siguen su curso en el Poder Judicial. Como decía, es una medida que va hasta tres años y tiene como condición el mandato de la realización de un plan de intervención que realiza la subdirección técnica. Ocasionalmente tiene medidas de tareas comunitarias, pero es excepcional.

En la LUC se cambia a libertad a prueba. ¿Cuál es la diferencia? Va hasta veinticuatro meses y está indisolublemente unida a la prestación de servicios comunitarios. ¿Por cuánto tiempo? Por diez meses como máximo y con una carga de tarea comunitaria de doce horas semanales como máximo, distribuidas en dos horas diarias. Eso es lo que dice la ley. En la práctica se podrán imaginar que mandar a alguien dos horas por día a una institución termina siendo ineficiente para esta; para la persona, por los gastos que le genera, y para nuestra institución, por los procesos que eso significa. Entonces, caso a caso, con los jueces, llevamos el límite a cuatro horas diarias. Esa es la prestación de tareas comunitarias.

¿Cuál es el desafío de esto? Que nos obligó a generar un sinnúmero de convenios con instituciones públicas que pudieran recibir a estas personas. En este momento tenemos 375 convenios a nivel nacional con instituciones a las cuales nos presentamos con una filosofía de ganar-ganar. Es decir, gana también la institución, porque los imputados se sienten útiles haciendo algo y devolviendo a la sociedad alguna parte del delito que cometieron. Entonces, hemos tenido casos de éxito. Muchas veces

se consigue trabajo a través de esta tarea comunitaria. En otros casos las personas quedan prestando tareas voluntarias por más tiempo, por ejemplo en una escuela. También tenemos casos de los otros, en los que ha habido problemas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera saber en qué consistía la libertad vigilada que está derogada, más allá de no tener el servicio comunitario como obligatorio.

SEÑORA GIACOYA.- En la elaboración de un plan de intervención que modificara la conducta.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la práctica, con tanta gente a la que está dirigida y con tan pocos recursos humanos y técnicos como tiene la OSLA, ¿efectivamente se procesaba?

Después de realizada la modificación que usted indicaba, con la anuencia de juez, pero evidentemente por encima de lo que dice la norma, ¿se respetan las doce horas semanales?

SEÑORA GIACOYA.- Sí, por supuesto.

SEÑORA ETCHEVERRY.- ¿Qué razones entiende usted que pueden explicar el salto entre 2018 y 2019 de la libertad vigilada, que es notorio?

SEÑORA GIACOYA.- Fue por el uso habitual que hicieron los jueces. Fue una decisión judicial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, el juez es quien la determina.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Por supuesto, pero la pregunta es cómo creció tan de golpe. ¿Hay algún otro factor de contexto?

SEÑORA GIACOYA.- Es claramente una herramienta que los jueces pueden usar o no, y la doctrina lleva a que se use o no.

Está claro que los planes de intervención a veces son profundizados en aquellos casos en que tenemos más chances.

Otra cosa que sucedió fue que cuando llegamos a la OSLA no había un sistema integral de información, por lo que se desarrolló un módulo del sistema de gestión carcelaria específicamente para la oficina. En este momento estamos en el segundo año de su implementación. Todos saben lo que cuesta la implementación de un sistema informático, no solo por la gestión del cambio que supone, sino por los recursos humanos que se necesitan para el ingreso de datos. Hoy en día tenemos 4201 medidas ya ingresadas. Se redefinieron procesos –esto es importante– que hacen que toda persona que llega a la OSLA es atendida por un equipo de guardia, y ahí se le dice a la persona cuáles son las medidas que tiene, qué condiciones debe cumplir y cuál es el proceso que va a seguir. Nos hemos estipulado como objetivo que el plan de intervención y la entrevista en profundidad se hace dentro de las tres semanas subsiguientes. Eso es un desafío muy importante para nosotros.

Como decía, en el 2018 teníamos 1078 medidas. Al año siguiente teníamos diez veces más y crecimos en veinte personas. Con esto se responden muchas dudas.

Estamos creciendo y, por suerte, ahora vamos a incorporar más personas y más técnicos.

La OSLA se crea como una unidad especializada y técnica.

SEÑORA BARRERA.- Dado que el tema no me quedó claro, pregunto si las medidas las dictamina el juez.

SEÑORA GIACOYA.- Sí, por supuesto. Cuando alguien comete un delito, tiene dos destinos posibles. Uno es la privación de libertad y el otro, una medida alternativa a la prisión. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Que evidentemente debe haber personas que están en prisión y que quizás sean para una medida alternativa. También es real que hay personas con medidas alternativas que no tienen todas las condiciones en este momento para que nosotros podamos modificar la conducta como quisiéramos.

SEÑOR MENDOZA.- En la práctica, por lo general, cuando un joven comete un hurto, la primera sanción de la justicia es por medida alternativa, y si comete un segundo hurto va a la cárcel. Es decir, lo que vemos todos los días en los documentos es que en rapiña sí va directo a la cárcel, pero los que ingresan por hurto ya tienen un antecedente sin prisión. En el caso de hurto, la primera medida es por la OSLA, y ante el segundo hurto ahí sí va a la cárcel. También pueden darse dos hurtos, si son chicos, por la OSLA, y en el tercero va a la cárcel. Un primario no va a la cárcel por un hurto, sí por rapiña. Es decir que por lo general cuando entra a la cárcel ya estuvo por la OSLA.

A nosotros nos falta documentación para ver la reincidencia. Eso lo estamos viendo en los sistemas que tenemos. Queremos saber cuánta gente pasa por la OSLA y qué hacen después, y cuántos de los que están en la cárcel pasaron por la OSLA, para ver la eficacia que tuvo el mecanismo. El SGC –Sistema de Gestión Carcelaria– recién quedó habilitado en julio del 2018, por lo que antes de esa fecha no tenemos información. El Sistema de Gestión Carcelaria comenzó a aplicarse a la OSLA hace poco tiempo. Por eso nosotros recién ahora estamos centralizando la información.

El INR se creó en 2010, pero de él solamente dependían las cárceles de Montevideo y Libertad, y todas las demás, de las jefaturas. La última cárcel que terminamos de pasar al INR fue la de Florida en el 2015. En ese momento recién podemos decir que el INR pasó a ser un instituto nacional de rehabilitación. Hasta ese momento no fue nacional, porque muchas cárceles, insisto, dependían de las jefaturas. Nosotros tuvimos que hacer todo ese trámite para pasar las cárceles de las jefaturas al INR. No había documentación centralizada, cada jefatura llevaba la suya.

En la Policía se maneja el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que es más antiguo; en el INR, el Sistema de Gestión Carcelaria. Repito que la documentación que

está informatizada es posterior a julio de 2018. La OSLA recién se empezó en el 2020. Antes de esa fecha tenemos todo en papel.

Todo el mundo habla de la reincidencia y se dice que es de un 65 %, pero yo no tengo datos científicos en ese sentido. Recién ahora estamos viendo datos cruzados. Por ejemplo: este año al INR entraron 8370 personas. Tenemos que saber cuántos tuvieron medidas por la OSLA antes, para saber si es eficaz o no, si sirve o no. La idea es cruzar esa información, pero, insisto, recién ahora está informatizada.

SEÑORA GIACOYA.- Para complementar la respuesta a la pregunta de la legisladora Barrera, quiero decir que hay una tercera opción. Es decir, las opciones son: cárcel, medida alternativa o una combinación de ambas.

Tenemos dos sedes, cuatro locutorios. Tenemos cuatro vehículos, pero uno solo está funcionando.

En cuanto a las principales líneas estratégicas, me importa destacar que trabajamos mucho el sentido de la medida para la persona, para el técnico que ejerce la supervisión y para la comunidad. Si nosotros no podemos explicar a los técnicos por qué hacen lo que hacen, malamente van a poder modificar su conducta. Tienen que comprender cómo contribuyen con su accionar a los resultados finales que esperamos. Eso es fundamental para nosotros.

La suspensión condicional del proceso fue derogada, pero siguen viniendo personas por ese mecanismo. Era una medida donde se imponía una condición al imputado, mayoritariamente tareas comunitarias. Luego de cumplida, se le borraban los antecedentes penales. Son medidas cautelares que en general son restrictivas, es decir, de no acercamiento. Por ejemplo, los jueces pueden imponer a alguien que no entre al departamento de Salto. Para nosotros es imposible controlarlo o que no entre a determinada cadena de farmacias o de *boutiques*.

La ley de faltas es todo un universo conductual diferente, en tanto mayoritariamente tiene que ver con consumo de alcohol y documentación vehicular inadecuada. En Montevideo, por ejemplo, se van mezclando más los perfiles de faltas con los de aquellas personas que cometen un delito de índole penal. Por lo tanto, hay factores de riesgo asociados también a las faltas.

En cuanto a la cantidad de medidas activas a 2022, tenemos 5729 en espera de resolución, que son las que la persona cumplió a medias o no cumplió. En esos casos nosotros le mandamos un informe de situación a la justicia y, por tanto, debemos esperar que el juez nos diga qué hacer con esa persona. Usualmente, cuando una persona incumple algunas de las condiciones, se le da una, dos y hasta tres oportunidades para que cumpla. Eso genera el aumento del volumen de trabajo que tenemos.

SEÑOR SODANO.- Sobre las medidas alternativas que están aplicando en el tema de rehabilitación, como con Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, consulto cuántos tienen ingresados en esos tratamientos.

SEÑORA GIACOYA.- Lo que hacemos es usar las capacidades que ya están en el Estado. Por eso procuramos generar convenios. Recientemente concretamos un convenio con la Junta Nacional de Drogas mediante el cual se nos da la prioridad de atención en los dispositivos Ciudadela. Lo que nos ocurría antes era que teníamos dificultades de acceso. Por tanto, sí enviamos a la persona a los dispositivos, oenegés, etcétera, y luego controlamos que efectivamente haya ido. Nos tiene que traer un comprobante de que fue y qué acciones hizo y ahí elevamos un informe al juez acerca del cumplimiento de la medida. Cuando nosotros derivamos a la persona a un dispositivo, cobra valor judicial.

SEÑOR SODANO.- ¿De qué volumen estamos hablando?

SEÑORA GIACOYA.- Hoy trabajamos con 9284, y el 99,99 % de esas personas fueron enviadas a algún lugar.

SEÑOR SODANO.- ¿De 9284?

SEÑORA GIACOYA.- Exacto.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Al principio se habló de la cantidad de medidas a 2022, y se dijo que había tres categorías de activas y pendientes: las que se estaban trabajando, las que estaban en espera de resolución y las operativas. Ahora me queda claro que las que están en espera de resolución corresponden a que hubo algún tipo de incumplimiento y se está a la espera de la resolución de la justicia sobre si se continúa o no con las medidas, pero cuando usted dice «trabajando y pendientes», ¿a qué se refiere?

SEÑORA GIACOYA.- Me refiero a que no tengo los recursos humanos, materiales y logísticos para darle seguimiento.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Supongamos que el juez dictaminó que esa persona va a libertad a prueba. ¿Qué sucede?

SEÑORA GIACOYA.- Está pendiente, pero si va a la OSLA se la atiende.

¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hicimos un cambio importante logrando un convenio con la OPEC, Oficina Penal Centralizada. Antes, hasta diciembre del año pasado, los jueces entendían que la OSLA tenía la obligación de citar a todo ese volumen de personas. ¿Cómo lo hacíamos? A través de las seccionales. Eso genera todo un dispositivo y un proceso que es bastante más engorroso de lo que se dice. Entonces, ¿qué es lo que logramos? En este convenio con la OPEC, a cada persona que es formalizada con una medida alternativa se le entrega un papel por lo que tiene cinco días hábiles para presentarse ante las oficinas de la OSLA en Cerro Largo 847. ¿Qué son esas 3470? Personas que están en el interior o en Montevideo y no se presentaron

voluntariamente. Recuerden que, para hacer el plan de intervención, la mayoría que está pendiente es del interior porque no tenemos vehículos para ir, y son las mismas catorce personas que tienen que viajar. Por tanto, cuando viajan no están acá, no están haciendo lo que tienen deben y después hay que devolverles la cantidad de horas que trabajaron en el interior.

SEÑORA ETCHEVERRY.- En la medida en que las personas no vienen, ¿están en su domicilio? ¿A qué se refiere con la operativa?

SEÑORA GIACOYA.- Operativa es eso: las 1151 medidas que tiene la subdirección operativa en funcionamiento.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Quedó sin contestar qué sucede si no se presenta, si está en su domicilio.

SEÑORA GIACOYA.- Tiene libertad ambulatoria.

SEÑORA CAMARGO.- Concretamente, de la respuesta que se dio al legislador Sodano, que, de 9284, más del 90 % estaría en rehabilitación, quisiera que se ampliara un poco más el tema. Quedó la duda de que rehabilitación e internación es imposible porque no tenemos esa cantidad de camas.

SEÑORA GIACOYA.- Las 9284 son personas y se les hizo un plan de intervención analizando los factores de riesgo de reincidencia, que pueden ser control de impulso y consumo de sustancias psicoactivas y lo que respondí es que se hizo la intervención y se lo mandó a algún lugar. No quiere decir que estén internados, sino que se encuentran en forma ambulatoria yendo a algún lugar: a un psicólogo particular, a un psiquiatra de la mutualista o al Hospital de Clínicas.

Sobre la medida cautelar y las faltas ya respondimos y explicamos lo que eran las 5729. El cumplimiento de una medida alternativa puede ser parcial. Puede haber cumplido con la presentación en la seccional, pero no con las tareas comunitarias. Lo

mandamos a hacer un tratamiento psicológico y no fue. Entonces, damos cuenta a la justicia de que cumplió parcialmente con la medida impuesta, y es lo que está a la espera.

Sobre las faltas, señalo que es una logística importante porque van hasta treinta días y genera un circulante de personas haciendo tareas comunitarias en todos los centros. Tenemos actualmente 7128 personas en todo el país haciendo tareas comunitarias.

Para sintetizar, el 50 % de las personas que tienen medidas alternativas son hombres y menores de treinta años.

Les vamos a dejar toda esta información.

Vemos en pantalla los porcentajes por género: el 84 % son varones. Esto se correlaciona con los privados de libertad, que tienen la misma proporción.

Hoy en día ya tenemos vencimientos de medidas alternativas al 2027, por lo que tenemos que ir programando los recursos para esa época.

Les trajimos también una lista de los delitos más habituales, que se la dejamos. La receptación es el más frecuente.

En cuanto al abigeato, la ley explícitamente impide que tenga la posibilidad de una medida alternativa. Eso ocurre en la realidad.

Tuvimos que generar un área específica de convenios que nos ayuda a gestionarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón que interrumpa. Lo que la ley modificó no fue sobre el delito de abigeato simple, sino el abigeato considerado como asociación organizada para delinquir.

SEÑORA GIACOYA.- De todas maneras, tenemos algunos delitos que no están previstos. Son cosas que pasan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto.

SEÑORA GIACOYA.- Otra cosa que pasa –esto puede ser ilustrativo– es que en el Poder Judicial la información puede no estar actualizada y que se le impongan dos medidas alternativas a una misma persona. Nuestra función ahí es conectar a los dos jueces que impusieron estas medidas y decírselo; por eso tenemos un rol asesor hacia el cual nos queremos inclinar para poder agregar valor, desde el punto de vista técnico, modificando conductas. Eso es lo que queremos hacer.

Esto debería ser presentencial. Es imposible que lo hagamos ahora con los recursos que tenemos.

Con respecto a la distribución de convenios, es un trabajo arduo en sí mismo la su búsqueda y convencer a la gente de que le vamos a proponer un ganar-ganar en todas las instituciones.

SEÑOR MENDOZA.- Un tema del que hemos estado hablando con Gabriela Giacoya es el de los seguros. Ella lo va a explicar y se consultó a la facultad sobre este tema.

Muchas veces hacemos un convenio para que la persona trabaje. ¿Dónde va a trabajar? En instituciones públicas, en una ONG o en otras instituciones que no tengan fines de lucro. No es para trabajar en empresas que logran lucros, porque esa persona va gratis.

Hemos tenido dificultades al ir a golpear puertas, porque muchas instituciones públicas preguntan quién se hace cargo del seguro médico. Si esa persona se cae de una escalera trabajando y no puede trabajar en su vida particular, o si se quiebra una pierna, o si le pasa algo, ¿quién se encarga de los seguros?

Mantuvimos una entrevista con el señor presidente del Banco de Seguros del Estado y también tuvimos un dictamen de la Facultad de Derecho; es un problema

grande. ¿Qué pasa con esa persona si sufre un accidente durante el trabajo? No está cubierta.

SEÑORA GIACOYA.- Con respecto a este problema que menciona el director nacional, la cátedra de Derecho Laboral dictaminó que, eventualmente, si hubiera algún tipo de accidente, la persona debería hacer un juicio civil a la institución, en este caso, a nosotros.

Para minimizar ese riesgo, tomamos la decisión de que ninguna persona va a hacer una tarea comunitaria si no tiene cobertura de salud. Por lo tanto, si no la tiene, nosotros la afiliamos a ASSE. Es una forma de minimizar el riesgo. Afortunadamente, nunca ha pasado nada.

Estas son las líneas que hemos seguido. Nos gustaría transmitirles que la lógica de la medida alternativa es diferente de la de privación de libertad. No todos los jueces de ejecución piensan igual acerca de las medidas en algo muy simple que complica muchísimo la operativa. Por ejemplo, desde cuándo comienza a contarse la medida alternativa. Se sabe que el vencimiento de pena cuando alguien está en privación de libertad es ese día, y si no egresa de una cárcel, su director va a tener muchos problemas.

A nosotros se nos mandata que el vencimiento de pena es estimativo. Por tanto, a la persona –como les decía– se le da una, dos o tres oportunidades, y si en primera instancia eran catorce meses, podrán llegar a ser veintiocho o más. Hay jueces de ejecución que piensan que la medida empieza a contabilizarse en el momento en que la OSLA toma intervención y en el que la persona ha cumplido con todas las condiciones. Eso genera, entonces, un mayor volumen de medidas.

Trajimos a la comisión muestras de dictámenes quitándoles, por supuesto, el nombre de los imputados.

Muchas gracias. Quedamos a las órdenes por cualquier consulta que deseen hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Encomendamos a la secretaría que, una vez que reciba la información, se distribuya inmediatamente a los integrantes de la comisión.

SEÑORA BELÉN.- Muy buenas tardes.

Antes de comenzar, agradecemos la oportunidad que nos dan de brindarles información acerca del trabajo que realizamos día a día.

La subdirección operativa se encarga de todo lo que tiene que ver con prisiones, arrestos domiciliarios y tobilleras. Al día de la fecha, tenemos 1151 personas que se encuentran en esa situación, de las cuales 677 se encuentran en el interior del país y 474 desde Montevideo hasta cuarenta kilómetros, que es el radio que la OSLA llega a controlar.

El control en el interior del país se da a través de la seccional que corresponde al domicilio de la persona. Ellos son los que nos apoyan en ese sentido y realizan el control de la medida. Contamos también con el oficial de enlace, que es un jerarca que depende de la jefatura y que a la función que él cumple se le suma una más que es la de colaborar, en la medida de lo posible, con la OSLA. Mensualmente, nos pasan la cantidad de medidas de prisiones domiciliarias que ingresan y finalizan en el mes. El control propiamente dicho lo realiza la seccional que corresponde al domicilio.

Nosotros nos encontramos trabajando desde la OSLA de Montevideo. Debido a los recursos humanos y logísticos con los que contamos, podemos abarcar hasta 40 kilómetros de cualquier ruta nacional desde Montevideo.

El control de la medida de prisiones y arrestos domiciliarios se realiza de dos formas: el de planilla –como lo denominamos nosotros– y el de tobillera electrónica. Al día de la fecha, tenemos solamente 17 policías que cumplen la función. Contamos con

un móvil –como ya dijimos– con el que cubrimos 474 personas que se encuentran en situación de prisión domiciliaria.

Al día de la fecha, el control por planilla, desde Montevideo hasta cuarenta kilómetros, es para 388 personas que se encuentran en esa situación. ¿Cómo se realiza? El policía debe concurrir a los domicilios de la persona que están distribuidos en los peores barrios de Montevideo y realizar el control de la medida. Se le hace firmar una planilla como que está permanente. Se pone presente, cuando así lo está, o ausente, en caso contrario y, *a posteriori*, se eleva al juez competente.

La realidad es que, al día de la fecha –por estar abocados a otras situaciones que explicaremos más adelante–, solo podemos controlar una vez al mes a esa persona que se encuentra en prisión por planilla. Al principio la persona cumple porque se le da una medida sustitutiva de la prisión, pero después de que se da cuenta de que nosotros podemos ir una vez al mes, ya como que hace su vida normal.

Por otro lado, desde 2015 venimos cumpliendo la función de instaladores de tobilleras electrónicas, pero a partir de este año cumplimos las dos: la instalación física del dispositivo y la supervisión monitoreada. Antiguamente, antes de este año, ese apoyo nos lo brindaba la Dimoe, pero ahora tuvimos que encargarnos también nosotros.

Como dijo el director nacional, hoy en día contamos con 600 tobilleras para salidas transitorias y 200 para prisiones domiciliarias. Al día de la fecha tenemos 163 tobilleras conectadas.

La función que cumple la tobillera cuando se le pone el faro es prisión domiciliaria o salida transitoria, que es por GPS. En sentido tenemos un inconveniente, porque los mismos policías que realizan la función del control de la medida por planilla también hacen el de las instalaciones. A su vez respecto a esas 474 personas, el juez también nos pide lo que tiene que ver con conducciones, fiscalías, médicos, y todo lo

que ustedes se puedan llegar a imaginar porque llevamos a las personas hasta el Abitab a cobrar. Eso implica que tenga quince policías distribuidos en doce por treinta y seis. Si hacemos el cálculo me quedan, más o menos, tres policías por turno de doce horas. Eso significa que el policía, para realizar las conducciones que nos piden al juzgado, a los médicos y todo lo que ustedes se puedan imaginar, debemos levantar a la persona en el domicilio, llevarlo al lugar donde está dispuesto con custodia policial y después reintegrarlo al domicilio. Claramente los números no dan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Imposible.

SEÑORA BELÉN.- Es imposible. Por eso sucede que la función real que tendríamos que hacer de controlar la prisión domiciliaria no la estamos realizando. Realmente somos –disculpen la palabra– una especie de Uber de esas personas que están en prisión domiciliaria. Tenemos un vehículo solo para todo eso: para toda la parte operativa, pero a su vez para apoyar a la subdirección técnica cuando realiza los viajes con el mismo móvil y mi personal que va de chofer a realizar el apoyo; ¡pobre! La verdad es que casi nunca podemos hacerlo, pero cuando sí es posible se realiza con el mismo policía –mi chofer– que se efectúa el apoyo.

En cuanto a las tobilleras, les decía que realizamos su instalación física y también la supervisión. ¿Qué implica? Que de estas 163 personas que tenemos en prisiones domiciliarias también con tobilleras, se realiza mayor control a través del monitor porque si la persona sale del domicilio nos avisa; obviamente yo no tengo la respuesta operativa para dar porque no tengo personal para mandar. Eso es en lo que tiene que ver con la respuesta operativa.

De todas las medidas, excepto de la de violencia doméstica, debería de encargarse la OSLA al día de la fecha. También estamos teniendo un inconveniente con el tema de la violencia doméstica, porque cuando la víctima no quiere dispositivo o

cuando son menores de edad están disponiendo que se coloque nuestra tobillera y, obviamente, nosotros no tenemos los recursos ni los medios para darle las garantías a esas víctimas de una prohibición de acercamiento o comunicación. A su vez, nuestro dispositivo es individual y eso significa que solamente controla a la persona porque, como vimos hoy, no tenemos el otro dispositivo que controla la prohibición de acercamiento. Eso es algo que también estamos planteando a los jueces para tratar de evitar que esas tobilleras lleguen a nuestra posesión, porque no estamos en condiciones de dar respuesta a esas víctimas ni de poder asumir ese rol en el caso de la violencia doméstica.

Como ya dijimos, nos encargamos de todo lo que tiene que ver con las instalaciones de las tobilleras. Cuando está dispuesta su instalación, si no se pone la tobillera se necesita custodia policial, pero obviamente, como la condición de todas las unidades es que no tenemos personal, no podemos mandarla.

Hay innumerables situaciones que nos pasan. La persona fija un domicilio y muchas veces no es aceptado. Nosotros vamos a realizar el ingreso de la medida de prisión domiciliaria y los familiares nos dicen que hace diez años que no tienen conocimiento de la persona. Lidiamos con eso. Trabajamos las veinticuatro horas del día y muchas veces las resoluciones judiciales nos llegan a las dos o a las tres de la mañana. Quedamos nosotros con esa responsabilidad y la realidad es que muchas veces no sabemos ni qué hacer con esas personas.

En cuanto a los ingresos, a las finalizaciones y a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, estas personas, que se encuentran en un régimen de prisión domiciliaria, en ocasiones nos piden salir y nosotros tenemos que solicitar la autorización al juez, pero no tenemos los recursos administrativos suficientes. Muchas veces nos solicitan ir al médico y por falta de recursos no podemos llevarlos. Se nos

hace muy difícil en la diaria lo que tiene que ver con solventar las necesidades de todas las personas que tenemos bajo nuestra órbita.

Al día de hoy, hay solamente 12 personas abocadas al centro de monitoreo –que tienen que estar veinticuatro horas monitoreando esas 163 tobilleras que tenemos conectadas– y tenemos un policía, lo que es totalmente ilógico. Sin embargo, esto ya está subsanado, pues está previsto el ingreso de 45 personas que van a venir específicamente a cumplir la tarea de monitoreo, porque, por la cantidad de tobilleras que tenemos asignadas, nos tendríamos que parecer a un centro de monitoreo de la Dimoe. También, en lo que tiene que ver con el centro de monitoreo, se brinda una asistencia al usuario, porque muchos tienen varias problemáticas y a veces se termina actuando como psicólogos de esas personas.

Esto es lo relativo a la parte operativa.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Etcheverry).

SEÑOR MENDOZA.- En cuanto al tema de las carencias, como depende del INR, cuando hay problemas de personal o de vehículos, el instituto trata de colaborar en la medida de sus posibilidades. La OSLA es una unidad del INR y este trata de colaborar.

Si analizan la evolución del personal, verán que se ha incrementado en este último tiempo. Hay que ver cuánto personal recibimos nosotros y cuánto hay hoy. Si bien hay carencias y falta personal, su número ha aumentado. Estamos esperando la firma del señor ministro para que, como dije, próximamente ingresen 65 personas: 45 para monitorear y 20 para la subdirección técnica. Es decir que el personal ha aumentado significativamente, pero, por supuesto, aún falta.

Otro tema importante es que cuando se dispone una medida, a veces no se estudia, como dijo la subdirectora. Se ha dispuesto prisión domiciliaria para alguien que no tiene domicilio y hay que conseguirle un refugio o para alguien que vive en situación

de calle. También hay que abordar este tema, ver dónde vive. Por ejemplo, se dispuso una prisión domiciliaria en un barrio carenciado, en Cerro Norte; fueron dos policías en un vehículo nuestro, de noche –porque era prisión domiciliaria nocturna–, los asaltaron y le robaron el arma de reglamento a uno de ellos. El policía entregó el arma; tuvimos suerte, porque no corrió riesgo de vida, pero lo digo para que sepan lo que significan esas prisiones.

Nosotros tenemos muchas prisiones domiciliarias, ya sean nocturnas o permanentes, en diferentes lugares, a veces problemáticos, y los policías tienen que ir de noche a controlar que la persona tenga la tobillera puesta, luego de haber trabajado todo el día. Este es un tema importante, porque no se estudian las medidas alternativas antes de disponerlas. Nosotros entendemos que antes de disponer la medida alternativa habría que ver si es posible su cumplimiento y cómo. Sin embargo, se disponen y es la OSLA la que luego tiene que ir a ver la casa y controlar, entre otras cosas. Nosotros decimos que lo ideal es lo que hacen en Estados Unidos: primero estudian las medidas alternativas y luego las disponen. Acá, se dispone la medida sin tener argumentos y después es la OSLA la que tiene que cumplirlas, muchas veces sin tener las condiciones para hacerlo.

Claro que hay muchos problemas, pero hay que reconocer que, con los pocos medios que tenemos, algunos se han ido solucionando. Estamos trabajando en ellos, llevando cada día más medios y trasladando personal de las cárceles para la OSLA. Es notoria la cantidad de personas que recibimos, pero el personal de la OSLA tiene que estar capacitado, porque no es lo mismo cuidar la seguridad en una cárcel que trabajar en la OSLA. El funcionario debe tener ciertas características, cierto perfil para hacer esta tarea. Como se dijo, muchas veces el policía va a controlar, pero también hace de psicólogo y tiene que hablar con la persona que allí está. No es solamente controlar,

porque hay personas que tienen muchos problemas y, por lo tanto, el policía o el funcionario –hay operadores que ayudan en la tarea– muchas veces habla con ellas, que están en prisión domiciliaria y no ven a nadie.

Lo otro importante a destacar es lo que se habló con relación a que la prisión domiciliaria es como si fueran celdas, es como si hubiera muchas cárceles extendidas en todo Montevideo y en el interior. Esa persona no puede salir y si, por algún motivo, tiene que hacerlo, debe ir con custodia, aunque tenga tobillera. De necesitarlo, los policías tienen que llevar a la persona en los vehículos policiales al hospital, al sanatorio, porque, muchas veces, el motivo por el cual la persona está en prisión domiciliaria es que se encuentra enferma, está quebrado y, por lo tanto, el policía le hace de enfermero. Otras veces, la persona tiene que ir al Abitab y el policía lo lleva o pide para ir al supermercado y el policía tiene que estar a su lado con la chismosa de verduras. Eso es así y nosotros estamos analizando este tema, porque no es la misión que tiene el policía, pero si se le autoriza a la persona que está en prisión domiciliaria a ir a tal lado, el policía tiene que cumplir. Esas son las realidades que estamos viviendo hoy.

SEÑOR DÁVILA.- Para dejar en claro el tema del arresto o prisión domiciliaria les voy a dar ejemplos. Uno claro es el del barrio Los Palomares. Nosotros contamos con un vehículo, un chofer y un funcionario policial. Imagínense la situación: hay que ingresar al barrio e ir por los pasadizos de Los Palomares hasta el fondo. El policía va solo, golpea la puerta y hace el ingreso, mientras tanto el otro policía se queda en el vehículo con contacto visual con el funcionario. Nos encontramos muy vulnerables en ese sentido y lo digo para dejar en claro que no es tan fácil el tema de los ingresos. Otro ejemplo es el que comentó el director nacional sobre la rapiña que tuvieron los funcionarios en el Cerro.

También quiero dejar en claro que a veces se disponen medidas sustitutivas, como el arresto o la prisión domiciliaria, y sucede que a las dos o tres de la mañana la subdirección operativa va a llevar a la persona y no es aceptada por la familia. Hubo un caso en que la seccional 10.^a me llamó por una determinada situación y me preguntó si íbamos para que la persona fuera ingresada. Le expliqué que nosotros primero tenemos que hacer un estudio socioambiental para ver si se dan las condiciones para la instalación de la tobillera, que en primera instancia era lo que se requería. Al llegar al domicilio –no fuimos con la persona, porque primero tenemos que hacer el estudio socioambiental para ver si se dan las condiciones para el monitoreo electrónico– sale un señor con dos niños. El personal de la OSLA se presenta ante ese señor, le cuenta la situación y le dice que fue para ver si podían hacer un estudio de su domicilio para ver si se daban las condiciones para la instalación del dispositivo electrónico. El señor mira sorprendido y contesta: «Mire, hace cinco años que se fue y me dejó con los niños. En esos cinco años no supe nada de ella». Por eso digo que hay situaciones en que se debe llamar a la Fiscalía, dar cuenta y ver qué resolución tomar con esa persona. La Fiscalía tiene que comunicarse con el juez que dictaminó en su momento que la persona tenía que cumplir con esa sanción. Resumiendo: después de las comunicaciones judiciales se le dio la oportunidad a la persona para que diera otro domicilio y, como no tenía otro, tuvo que ir a prisión. Se dan situaciones complejas a diario por no tener el estudio previo de si la persona está o no en condiciones de cumplir con la medida.

Con relación a los viajes al interior del país, por un tema logístico a veces se hacen todas las coordinaciones con las jefaturas departamentales, se cita a las personas para que el personal de la OSLA concurra a cierta ciudad a hacer la intervención del plan individual de parte del equipo técnico, pero a veces, por problemas logísticos, tenemos que suspender el viaje. Es decir que se utilizan recursos logísticos y recursos

humanos de la jefatura que cita a la persona y después tenemos que avisar que no vamos a poder concurrir.

SEÑORA BELÉN.- Solamente quiero aclarar que nosotros trabajamos con todos los juzgados, con todas las unidades, con todas las seccionales y con todas las direcciones nacionales. Una vez que el juzgado dispone en una resolución judicial que va a intervenir la OSLA, ya sea prisión domiciliaria o tobillera, ellos disponen que nos corresponde. Por ejemplo, si en la seccional 18 o la 24 hay una persona con prisión domiciliaria, nosotros, con los pocos recursos que tenemos, debemos levantar a esa persona y llevarla al domicilio para realizar el ingreso.

También ha sucedido en las medidas que son combinadas –tienen seis meses de prisión efectiva y seis meses de prisión domiciliaria– que nos llamen de madrugada desde el ex-Comcar o de cualquier otra unidad para decirnos que tienen a una persona que va a pasar a cumplir prisión domiciliaria y que fijó domicilio en Treinta y Tres o en Salto. En ese caso, nosotros tenemos que tratar de hacer todas las coordinaciones necesarias, porque obviamente, con el móvil que tenemos, no podemos llevar a esa persona, pero ya está bajo nuestra órbita y nos tenemos que hacer cargo. Entonces, pedimos apoyo a la dirección nacional y a todos los que puedan brindarnos un vehículo.

Realmente, esta tarea nos produce un desgaste diario por no poder contar con los medios o recursos para llevar adelante esa situación; igual salimos adelante, como dice el subdirector, por tener la camiseta bien puesta.

SEÑORA GIACOYA.- A pesar de eso, el trabajo sale a costa del compromiso de la OSLA y de la responsabilidad de todos los funcionarios al saber que esto impacta. Además, esto tiene un costo afectivo para cada uno de los funcionarios, porque algunos están certificados, como es obvio, por *burnout*.

SEÑORA MATO.- Antes que nada, quiero felicitarlos por la capacidad de sobrellevar las dificultades que nos han relatado en cuanto al trabajo y la responsabilidad que eso implica. La verdad es que las condiciones que narran son responsabilidad del Estado y, si bien los funcionarios se ponen la camiseta, no debería ser así. Todos somos conscientes de que las condiciones deberían ser otras para que se pueda cumplir mínimamente con los objetivos que tiene la OSLA. Por ejemplo, cuando se nos habla de modificar conductas, vemos que con esta cantidad de personal es imposible hacerlo; incluso, la directora dijo justamente eso.

Con respecto a este punto, consulto si ustedes han cuantificado qué cantidad de personal –más allá del que llega ahora– necesitarían para estar funcionando bien.

En cuanto a los casos vinculados a violencia doméstica, no entendí por qué no lo está haciendo la Dimoe.

(Dialogados).

–Mi pregunta específica es por qué hay algunos casos específicos de violencia doméstica que van a la OSLA, a pesar de que la Dimoe tiene un dispositivo que puede hacer el seguimiento de las dos personas, cuenta con más personal, etcétera. Se me generó esa duda, porque sabía que lo estaba haciendo la Dimoe.

Con respecto a las personas que no tienen domicilio o están en situación de calle y la justicia previó que esa sea la medida, consulto si se está trabajando con el Mides en ese camino. Nosotros recién escuchamos al comisionado parlamentario, quien nos dijo que en el ex-Comcar hay lugares en los que se registra más de un 200 % de hacinamiento. Entonces, si una persona tiene una medida de prisión domiciliaria o está bajo la órbita de la OSLA y no puede acceder a ella por no contar con un domicilio debido a su situación económica y social, creo que estamos ante un problema. Justamente, uno de los temas que Naciones Unidas planteó a Uruguay tuvo que ver con

el acceso de la justicia. En ese sentido, si alguien no tiene un hogar y no puede cumplir con esa medida, habría que analizar qué hace el Estado para que se efectivice, porque, por ser pobre, se lo está condenando a ir a prisión, con el 200 % de hacinamiento y las condiciones que ustedes conocen.

Con respecto a la prisión domiciliaria por motivos de enfermedad o por edad, quisiera saber si hay ahora alguna persona en esa situación vinculada a delitos de terrorismo de Estado, cuántas están bajo la órbita de la OSLA y cómo se hace ese seguimiento.

Ustedes plantearon situaciones muy difíciles para la policía, como cuando hay que ir a Los Palomares. Conozco la zona, pero he ido de día y reconozco la fragilidad que tiene el trabajador en esos lugares.

Sin embargo, estaba pensando en personas que viven en barrios privados y que cometieron delitos de terrorismo de Estado; son casos conocidísimos de gente que tiene mucho dinero. Me gustaría saber si se los monitorea en su casa o si pueden hacer uso de todo el lugar. Ustedes decían que iban una vez por mes a verlos. Como son pocas personas, quizá sea más fácil saber si efectivamente se está haciendo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si les parece bien, vamos a hacer todas las preguntas juntas y después las contestan.

SEÑORA CAMARGO.- Antes que nada, quiero agradecer la honestidad con la que se manejaron en toda la presentación y felicitarlos por el trabajo que hacen a pesar de todas las dificultades que quedaron expuestas.

La primera pregunta es qué significa en la práctica que deje de ser una oficina para pasar a ser una subdirección. ¿Qué cambiaría en los hechos, en lo diario, pasar a esa categoría?

La segunda pregunta es sobre los 99 funcionarios. Hoy son exactamente el doble que en 2018. De esos 99, ¿cuántos están certificados? ¿Cómo se dividen? Me imagino que por turnos, porque no hay 99 funcionarios trabajando las veinticuatro horas. Ya lo preguntaron, pero quiero saber cuál sería el número ideal de funcionarios que se necesitarían o si tienen algún estudio al respecto. Haciendo un cálculo rápido, si los 99 funcionarios trabajaran veinticuatro horas y no hubiera ninguno certificado, sería un funcionario cada 200 personas. Obviamente, es imposible que un funcionario pueda monitorear o hacerles seguimiento a 200 personas a la vez.

También quiero saber si, con toda la tecnología que tenemos, con los celulares, con alguna aplicación que se pueda utilizar, no se podría comprobar si esa persona está en determinado lugar, para no tener que movilizar a un policía y dejarlo expuesto a una situación compleja.

Esas serían mis principales inquietudes.

Una vez más los felicito. Sabíamos que es complicado que 99 puedan cuidar a 20.000 personas, pero con la exposición nos quedó mucho más claro el trabajo que realizan.

SEÑOR SODANO.- Bien me dijo una vez un allegado: «Duro con los problemas, suave con las personas»; creo que es lo que debemos encarar también.

Habida cuenta de la hora que es, voy a colaborar con la mesa. Simplemente, como legislador, quiero agradecer la información que nos brindaron y, como ciudadano, agradecer las cosas que hacen con los recursos que tienen.

Conforme no estoy; creo que es algo sobre lo que debemos trabajar porque, para la demanda que existe, nos encontramos en un proceso que está en pañales y ni cerca de aprender a comer papilla. Esa es la realidad, que ya sabíamos que estaba instalada; solamente faltaba que se expresara.

Reitero el agradecimiento por haber concurrido y por haber sido tan sinceros con el Parlamento.

SEÑOR MENDOZA.- Si bien falta personal —es algo que siempre se dijo—, hay que ver la evolución, y ese 99 del 2022 dentro de poquitos días, el 15, pasará a 164, porque el ministro ya tiene en su despacho el ingreso de 65 nuevos policías para la OSLA. Quiere decir que si observan la evolución, podrán reconocer que falta gente —y va a faltar, porque el número ideal es más importante—, pero en una semana, en lugar de 99, serán 164.

Si me permite, señora presidenta, voy a responder la pregunta sobre los funcionarios del INR.

La señora legisladora Mato consultó sobre lo que dijo la subcomisario de que la Dimoe no hacía algunos seguimientos y sí el INR. Entonces, pediría que la subcomisaria explique en qué casos la OSLA hace el monitoreo que se dispone en lugar de la Dimoe.

SEÑORA BELÉN.- En realidad, la Dimoe realiza claramente el abordaje de violencia doméstica. Los casos en que la justicia nos ordena a nosotros hacerlo es cuando la víctima no quiere portar dispositivo o cuando es menor de edad, porque no se la puede ingresar en monitoreo.

SEÑOR MENDOZA.- Sobre la pregunta de cómo se controla si no tiene domicilio, pediría que le ceda la palabra al comisario Dávila.

SEÑOR DÁVILA.- En los casos que no tienen domicilio nosotros hacemos las comunicaciones y coordinaciones con los refugios del Mides. De todas maneras, eso trae aparejado una problemática, porque las comunicaciones que realizamos con el Mides no son algo efectivo. Nosotros podemos conseguir por dos o tres días, incluso una semana, pero no es algo que quede sólido. Tratamos de hacer una intervención para

saber si la persona tiene algún familiar o amigos y, en función de ello, realizamos las comunicaciones a la justicia. Sería muy bueno contar con el apoyo de los refugios del Mides, porque a veces dejan sentado que la persona tiene siete días para estar ahí; después de ese tiempo, tenemos que ir nuevamente a ver que exista lugar para que la persona pueda cumplir. Todo esto se hace siempre con el aval de la justicia competente.

SEÑOR MENDOZA.- También la señora legisladora Mato, de pasada, habló de hacinamiento. Sin ánimo de entrar en polémica, quiero decir que hay hacinamiento, pero es puntual, no en el sistema penitenciario.

Antes de venir hoy aquí pasé todo el día en el ex-Comcar, donde se está refaccionando el módulo 1 y se están haciendo otros movimientos. Puedo decir que el hacinamiento es en ciertos módulos y en determinadas cárceles. Hay algunas en las que hay hacinamiento, pero no en otras. La cárcel más grande tiene hacinamiento, mientras que hay otras que cumplen los estándares necesarios.

La otra pregunta refiere a las personas privadas de libertad por delitos de lesa humanidad. Hay alrededor de veinte personas en la Unidad n.º 8 de Domingo Arena y otras para las que, por diversos motivos, la justicia dispuso prisión domiciliaria. El comisario pasará a explicar cómo es el procedimiento para controlar a esas personas.

SEÑOR DÁVILA.- Esas personas están con dispositivo electrónico y las veinticuatro horas en sus respectivos domicilios. Cuando tienen que hacer alguna diligencia –por ejemplo, ir al médico–, se hacen las comunicaciones con la justicia competente, se le solicita autorización y nosotros los trasladamos. Mayormente, son todas consultas médicas y controladas por la sala de monitoreo de la OSLA, ubicada en San Martín 1021.

SEÑOR MENDOZA.- Nosotros no hacemos ninguna distinción y están bajo la sujeción del INR. No tienen ningún beneficio. La justicia dispuso prisión domiciliaria y

se lo controla como a cualquier otra persona. Además, esta persona, como dijo la legisladora, tiene condiciones de energía eléctrica para instalar las tobilleras y continuamente son monitoreadas por las cámaras de nuestro sistema.

SEÑOR DÁVILA.- Como dijo el señor director nacional, al igual que todas las demás personas que están cumpliendo una medida sustitutiva, en muchas oportunidades solicitan concurrir a un médico, pero nosotros no realizamos el traslado por falta de recursos logísticos y humanos. También hay un malestar de la otra parte por no hacerlo, pero, como dijo el señor director nacional, es para todos igual y no solo para ellos. A veces es imposible. Por ejemplo, si tenemos tres juzgados en el día –estamos haciendo cinco juzgados–, es imposible llevar a una persona a una consulta médica que tenga coordinada.

SEÑORA MATO.- Con respecto a esas situaciones, a veces se solicita por el juzgado que los traslados médicos sean hechos por familiares.

SEÑOR DÁVILA.- Cuando no podemos hacer los traslados, realizamos la comunicación a la justicia competente y solicitamos autorización para que pueda concurrir. A veces son autorizados y otras no; cuando lo son, hacemos el monitoreo a través de la sala de monitoreo de la OSLA.

SEÑOR MENDOZA.- Sobre lo que dijo la legisladora Mato, que son los familiares los que consiguen los números, eso pasa con mucha gente. Muchas veces los familiares van a las mutualistas o a los hospitales y sacan número para luego hacer los trámites. Nosotros no lo hacemos con esos números, sino que se le pide autorización. No hacemos ninguna salida de la casa si no tiene autorización del respectivo juzgado.

La legisladora Camargo preguntaba qué significa en la práctica que hoy la OSLA sea una oficina y que después pase a ser una subdirección nacional. La licenciada Salinas va a contestar la pregunta.

SEÑORA SALINAS.- En lo que tiene que ver con esa diferencia, en el articulado de la actual rendición de cuentas creo que se menciona una dirección nacional, más que una subdirección, dependiente del director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto da cuenta específicamente de una jerarquización dentro de la institución que, como decíamos, con esta complejidad no sería una oficina. Esto no implica un presupuesto propio, que justamente es uno de los objetivos a que se quiere llegar para tener esa independencia total de recursos humanos y logísticos y de insumos, que es la gran necesidad que hoy se tiene. Actualmente, la OSLA se rige con el presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se da tanto para la privación de libertad como para las medidas alternativas en todos estos rubros que les comenté: comida, vehículos, recursos humanos, funcionarios, etcétera. Por lo tanto, se da cuenta de una jerarquización en cuanto a la tarea, pero no hay asignación de un presupuesto para llevarla adelante.

SEÑOR MENDOZA.- Lo importante de esto es que, al ser una oficina, ahora adquiere carácter nacional. Como dijo el director, la OSLA como una oficina se justificaba al principio, pero no hoy porque estamos diciendo que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Este es el primer paso para jerarquizar la institución y que sea una subdirección nacional que depende de mí. Hoy depende de la subdirectora técnica, señora Salinas, pero por la nueva disposición de la ley va a depender directamente de mí y es nacional.

Tengo que obtener recursos y los estamos logrando. Por ejemplo, en el caso del personal, de 68 funcionarios vamos a saltar a 165. Falta, pero estamos haciendo un gran sacrificio y vamos a seguir integrando personal que va egresando de la escuela, también policías. A medida en que salgan del Centro de Formación Penitenciaria, en el que hoy

tenemos más de doscientos alumnos, vamos a ir dando a la OSLA el personal que precisa.

También se van a adquirir vehículos. Se están comprando ya para el INR mediante licitación y, de ellos, ya está previsto que algunos serán para la OSLA. Estamos continuamente preocupados por que tengan medios humanos y materiales. Falta, pero hay que reconocer que año a año va aumentando la cantidad de personal para hacer la tarea.

La señora legisladora Camargo hizo una pregunta sobre cuántos trabajan por turno, ya que hay quienes se están sacrificando y hay personas con parte médico. De 99 funcionarios, sabemos que hay muchos con parte médico y que no van a trabajar las veinticuatro horas. Ella quería saber con cuántas personas se cuenta y, si la señora presidenta lo permite, el director va a hacer uso de la palabra para contestar esa pregunta.

SEÑOR DÁVILA.- Con relación al tema del personal, son 99 funcionarios en toda la OSLA; 10 cumplen funciones en el interior del país como oficiales de enlace.

Por otra parte, la oficina se divide en áreas: técnica, operativa y administrativa. En el área técnica contamos con 54 funcionarios, de los cuales 19 son técnicos. En el área operativa contamos con 18 funcionarios. Los demás cumplen tareas administrativas en el área jurídica y en la secretaría de dirección.

Como dijo el señor director, tendremos un incremento de personal y vamos a llegar a 164 funcionarios. Algunos de ellos van a cumplir tareas en el área de monitoreo electrónico, en la cual hoy por hoy tenemos una persona por turno. Son diez funcionarios y solamente tenemos ocupado un monitor para controlar los 163 dispositivos electrónicos que están en práctica.

SEÑOR MENDOZA.- Para continuar respondiendo a la legisladora Camargo sobre cuál sería el número ideal, nosotros estamos haciendo un estudio.

Como decía el director, el personal de la OSLA afectado a la tarea de la oficina es hoy de 99, pero hay que contar una cifra más grande integrada por el personal de las diferentes jefaturas. Como tenemos solamente los cuarenta kilómetros de Montevideo, nos estamos manejando también con las jefaturas. La Policía Nacional colabora con la OSLA.

En el interior se han tomado medidas para hacer control. Fui jefe de Paysandú y tenía gente de ahí afectada a las comisarías que, dentro de su patrullaje, también colaboraban con esto. Por un lado, tenemos la gente de la OSLA, pero la de jefaturas también ayuda con esto, cuya gran contribución hay que aceptar.

Otra pregunta era si se ha pensado en estudiar la tecnología para evitar que vayan los funcionarios en forma personal a diferentes lugares. Como dijimos, se invirtió en ochocientas tobilleras, pero también hay que reconocer la dificultad que existe —eso es algo que no se mencionó— porque hay una cifra muy importante de esos dispositivos cortados. El Ministerio del Interior invierte en tobilleras para esas personas que, cuando cortan el dispositivo con un cuchillo o una tijera, hace sonar una alarma. Hoy tenemos una importante cifra de personas que procedieron de esa forma, algunas de las cuales fueron formalizadas por desacato. Hay que ver cómo esta tecnología se aplica teniendo en cuenta la seguridad. Mirándolo así, es importante la tecnología, pero estamos hablando de infractores de la ley, de gente con problemas de adicción que se corta la tobillera para ir a una boca. Eso ha pasado. Nos lo han dicho: «Hemos roto la tobillera para ir a la boca porque lo necesitaba; la abstinencia me mataba». Obviamente, si va a la boca con la tobillera, queda mal.

Son realidades que tenemos y en las que estamos trabajando. Contamos con la tecnología, pero hay que ver qué personas son las que tienen que cumplir con la medida bajo la jurisdicción de la OSLA; personas con problemas de adicción, entre muchos otros. Tampoco se les podría dar un teléfono –como se dijo aquí– porque no sabemos a dónde irían a parar. Debemos ser realistas respecto a la población que tenemos bajo nuestra jurisdicción.

SEÑOR DÁVILA.- Con relación al personal, hicimos un estudio por parte del equipo de la OSLA, del que se desprende que, para la intervención de las medidas en la zona metropolitana, necesitaríamos 60 funcionarios técnicos y para el área operativa 40 policías ejecutivos, sin contar los que van a ingresar.

SEÑOR MENDOZA.- Hoy también se dijo al pasar que se está llevando a cabo la documentación para llamar a técnicos para el INR. Es decir que se está ingresando personal. Si bien a corto plazo no tendremos la solución de estos problemas, vamos a tener un gran incremento de personal y de técnicos.

La subdirectora técnica, licenciada Salinas, está haciendo las coordinaciones para que ingresen técnicos. Me gustaría, señora presidenta, que ella hiciera uso de la palabra para explicar mejor el tema.

SEÑORA SALINAS.- En un principio, contamos con vacantes para licenciados en psicología, trabajadores sociales y docentes de educación física. Estos últimos, serán destinados a las correspondientes unidades a los efectos de cubrir vacantes: 23 licenciados en psicología y 44 licenciados en trabajo social.

En una primera instancia se debe realizar el ascenso de los funcionarios que ya se encuentran en el instituto. Las vacantes que queden serán distribuidas en prioritarias y áreas necesarias del sistema.

SEÑORA CAMARGO.- Quisiera saber si están incluidos los oficiales de enlace.

SEÑOR MENDOZA.- No están incluidos. Estos son de la OSLA, dependientes del INR. Los oficiales de enlace y todos los policías de las jefaturas son dependientes de jefes de policía, los que contribuyen con vehículos, autos y oficial de enlace con la OSLA. Se aumenta la cantidad de personal. Estos son míos, del INR. Cada jefatura, en el caso de Rivera –de donde es oriunda la legisladora Camargo– el señor jefe de policía colabora con personal, vehículo y oficial de enlace.

SEÑORA BARRERA.- Antes que nada, quiero felicitarlos por todo el trabajo que hacen.

Me parece que lo dicho por ustedes nos pone –a quienes formamos parte de esta comisión– ante un deber muy grande de trabajar para que toda esta situación mejore. Desde acá, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero sin recursos no es posible. Creo que nosotros, desde este lado, somos los que tenemos que tratar de dar apoyo y de que las cosas salgan bien. Cuando están mal las cosas hay que decirlo y cuando están bien, debemos hacer lo propio.

Por lo tanto, entiendo que hoy nos tenemos que ir con el deber de trabajar dentro de nuestros partidos y de nuestras posiciones, ya sea de un lado o del otro, para tratar de buscar soluciones, porque estamos hablando de una sociedad entera, de cada uno de los uruguayos que están siendo víctimas o victimarios, y nosotros queremos que salgan adelante. Así que me parece que aunque haya sido larga la reunión, todos nos llevamos un sabor amargo y un sabor dulce. ¡No sé cómo explicarlo! Para mí ha sido muy interesante y educativa toda esta reunión.

Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

SEÑOR GERIBÓN.- Saludo a las autoridades del INR y los felicito por el trabajo con los recursos disponibles.

Como decía la senadora, la realidad nos interpela, porque así como casi se triplica el número de funcionarios que había en 2019, nos queda un debe porque no alcanzan. Como ya lo expresaron, se necesitan más funcionarios y esta comisión, desde el Parlamento, debe trabajar para lograr llegar a los números necesarios. Sin embargo, quiero destacar en la persona del director nacional, el trabajo de haber triplicado los números del 2019. No alcanza; faltan más. Es una situación muy complicada. Mi departamento tiene el Penal de Libertad. Todos sabemos la realidad con la que deben convivir a diario los funcionarios. Conocemos también el trabajo que realizan las jefaturas de policía en los enlaces. Nosotros hablamos con efectivos policiales que también a veces cuentan las vivencias que tienen que pasar. No son tan graves como las de Montevideo, pero sí hay algunos lugares del área metropolitana de mi departamento que son complicados.

Felicito al director nacional y al personal por el trabajo realizado. Quedamos con un debe porque no alcanza y hay que continuar. Sin embargo, quiero destacar lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y lo que se tiene planificado. Hay que luchar para que podamos llegar a esa realidad, a esos números de los que nos hablaba el comando.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA BARRERA.- No quiero dejar de decir que tanto el INR como la OSLA se iniciaron en 2010, por cuanto creo que ha sido un camino que se ha tenido que ir forjando. Quizá en este momento, después de doce años –si fuera un niño diríamos que está empezando la adolescencia–, es cuando tenemos que poner más recursos para que pueda salir adelante, porque primero era un bebé y había que enseñarle.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Todo lo expresado refiere a la situación compleja que han mencionado las autoridades en el reciente seminario. Hace un par de semanas

estuvieron las autoridades acá y eso fue parte de lo que dijeron. Es cierto que impacta más cuando quienes están en la primera línea de la trinchera también lo están planteando, y con esta crudeza, pero es lo mismo que se dijo ahí y lo que se ha dicho en el tratamiento de las rendiciones de cuentas. De hecho, estuvieron presentes las autoridades que se encuentran hoy acá, mostrando un gráfico similar sobre los recursos y demás. ¡Impacta!

Nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de la parte que nos toca, desde este lugar, desde la comisión, exigiendo –como hemos hecho la mayoría de los que están aquí– más recursos. Vamos a seguir peleando por recursos para ustedes, porque, en definitiva, también son para la seguridad de todos y para la garantía de quienes han cometido faltas o delitos.

En ese sentido me parece muy bueno el crecimiento de los recursos humanos. Es verdad que en 2018 y 2019 eran 48, pero considerando la cantidad de personas que había con medidas, el promedio era de 33. Si tomamos en cuenta que había 1600 personas con medidas y dividimos esa cifra por 48 personas, el promedio da 33. Sin embargo, 19.000 dividido 99, da 191. Esa cifra va a bajar, porque se van a sumar los 65 recursos nuevos y el promedio va a pasar a ser 115. De todas formas, va a seguir siendo un número muy alto.

Es decir, importa que se incrementen los recursos humanos, pero tiene que ser con relación a la cantidad de medidas alternativas que se están aplicando, que, además, creemos que es el camino que hay que seguir; lo veníamos discutiendo con el propio comisionado parlamentario y también acá. Debemos esforzarnos por ello: tiene que haber un aumento que permita la sostenibilidad de las medidas alternativas, que son una buena herramienta pero que terminan generando problemas si no otorgamos los recursos humanos necesarios.

SEÑOR GERIBÓN.- Tenemos que compararnos con 2019, pero, a su vez, considerar que la OSLA se encontró con un cambio en el paradigma. Esto es igual para la justicia, porque cuando mirábamos los números, antes había muchas libertades y prisiones no efectivas sin custodias. La justicia también tuvo un cambio, que implicó una mayor demanda a la OSLA y también al Instituto Nacional de Rehabilitación. Digo esto a efectos de ver la foto –que es grave– por completo. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo, pero con un diagnóstico cierto y real, porque hubo un cambio. La justicia dejó de enviar tantas personas a las cárceles y empezó a tomar otras medidas, como el aumento de la colocación de tobilleras electrónicas.

Algo que a mí me preocupa muchísimo es el aumento de la violencia doméstica. Esta es una situación muy complicada que está insumiendo muchísimos recursos a las jefaturas y me imagino que a ustedes también. Es un tema sumamente complejo que nos interpela y para abordarlo hay que otorgar recursos; lo digo como padre, esposo y abuelo.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- En 2019, era 65; sigue siendo mucho menos que 191. Los jueces aplican las leyes que nosotros gestionamos; acá es donde debemos transitar ese camino.

SEÑOR SODANO.- Como ya todos sabrán, hay un proyecto de ley presentado en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, sobre el cual hoy, justamente, tuvimos la devolución del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. Solicito el envío de la versión taquigráfica de esta sesión a los legisladores de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, claro; es un documento público.

SEÑOR SODANO.- Sí, pero me refiero a enviarla de comisión a comisión, como insumo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

(Apoyados).

—Les agradecemos muchísimo la información, la deferencia, la paciencia.

Vamos a seguir empujando. Es un debe.

Se levanta la sesión.

(Son las 20:46).